

NOVAPOLIS

Revista de Estudios Políticos Contemporáneos

Edición No.2

Febrero de 2003



La Cuestión Agraria en Paraguay y el Movimiento Campesino

NovaPolis
Edición No. 2 del Febrero de 2003

Revista editada por
ParaguayGlobal.com
Gabinete de Estudios de Opinión - GEO

Director: José Nicolás Morinigo

Consejo Editorial:
Carlos Martini
Luis Galeano
Myriam Yore
Edwin Brítez
Camilo Soares
Marcello Lachi

ISSN 2307-8693

Sumario

Tema:

La Cuestión Agraria en Paraguay y el Movimiento Campesino

Tomás Palau Viladesau

Políticas Agrarias en el Paraguay.

Instrumentos de la discriminación pág. 3

José Nicolás Morinigo

De la protesta social al movimiento campesinopág. 24

Luis Galeano

Movimiento Campesino hoy. Conquistas y derrotas en un contexto contradictorio de crisis social y políticapág. 32

José Parra y Camilo Soares

Movimiento Gremial Campesino y Organización Política

Revolucionaria: Apuntes de una atribulada relaciónpág. 39

Actualidad:

Edwin Brítez

El PT se mimetiza para hacer viable un nuevo liderazgo de la izquierda latinoamericana.....pág. 49

Marcello Lachi

Encuestas preelectorales:

¿Instrumento de análisis o de manipulación?pág. 55

Rafael Dendia

Tecnología y voluntad política:

el voto informatizadopág. 67

"POLÍTICAS" AGRARIAS EN EL PARAGUAY. INSTRUMENTOS DE LA DISCRIMINACIÓN

Tomás Palau Viladesau

Tomás Palau Viladesau. Maestría en Educación por la Universidad de New York en Buffalo. Post-Grado: Department of Educational Psychology. School of Education, State University of New York (SUNY) at Buffalo. Graduado con título de Master en Psicología Educacional. Maestría en Sociología por la Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales en Santiago, Chile. Fundador de varias ONGs en el país: Banco Paraguayo de Datos, Programa de Ayuda Cristiana, Programa Rural del Comité de Iglesias, BASE-ISEC. Miembro fundador de la REDRURAL, que nuclea 22 ONGs que trabajan en el sector campesino en Paraguay. Profesor en la Universidad de Formosa (Argentina). Consultor de varias agencias del sistema de Naciones Unidas y de otros organismos internacionales.

“Políticas” agrarias en el Paraguay. Instrumentos de la discriminación

Tomás Palau Viladesau

1. Prioridades: los temas de una agenda incumplida

En el Paraguay no existe una “política agraria” como tal. De hecho, no existe siquiera una política nacional de desarrollo. Y así como no hay desarrollo nacional, tampoco puede haber desarrollo rural. Se presenta a continuación la situación agraria del país, según un esquema de temas-problema que debieran haber sido abordados por el gobierno para atender la cuestión rural, describiéndose brevemente la situación actual de cada uno de ellos.

a. La reforma agraria

Cuando en 1963, el Instituto de Reforma Agraria es sustituido por la Ley No. 852 en el Instituto de Bienestar Rural, el gobierno del entonces Gral. Stroessner había dado por sentado que los campesinos ya habían recibido la tierra que debían recibir y que ahora empezaba, no la etapa de la reforma agraria sino la del bienestar rural. Nada más contrario a la realidad. Es a partir de entonces que se agudizan los problemas para una sociedad campesina agobiada por la corrupción, la ineptitud administrativa y las políticas económicas socialmente excluyentes.

i. La distribución de la tierra y la problemática de los sin tierra

El Cuadro de abajo resume la distribución de la tierra en el país por tipo de unidades de producción, donde se puede apreciar la formidable concentración.

Cantidad de explotaciones y superficie detentada según grandes sistemas de producción

Tipo de unidades	Cantidad de fincas	%	Superficie en has.	%
Indígenas	389*			
Unidades de producción menor de 20 has.	247.617	80.6	1.466.768	6.2
Farmers con tractor propio o ajeno (50-200 has.)	4.370	1.4	395.061	1.7
Gran empresa agrícola (mayor de 500 has.)	354	0.1	1.440.181	6.0
Ganadero (mayores de 500 has.)	4.627	1.5	18.808.256	79.0

* Se trata de establecimientos y/o reservas indígenas

Fuente: FAO (1996 a.)

El Índice de Gini¹, que está estimado por la FAO como el más alto del mundo para el caso de la tierra rural, muestra (para los últimos datos disponibles, ya que el Censo Agropecuario que debía realizarse en el 2001 no se realizó por falta de presupuesto) que lejos de orientarse hacia una desconcentración, la tierra rural en el Paraguay tiende a irse concentrando cada vez más.

Sin existir un censo confiable, se estima que no son menos de 200 mil las familias ya constituidas o jóvenes adultos que no tienen y que buscan tierra. Hay pues una fuerte presión sobre dicho mercado y un grave problema social que se deriva de esa problemática.

ii. *La regularización de la tenencia*

Se estima (FAO, 1996) que en el país existen no menos de 120 mil pequeñas propiedades rurales ocupadas, sin que se ostente el título de propiedad respectivo, la mayoría de las cuales son explotadas y poseídas desde larga data “sin que se haya regularizado su dominio” (p.61). Aunque el Código Civil norma sobre el usucapión en ocupaciones de buena fe por 10 o 20 años, no hay legislación que permita un sistema administrativo rápido al acceso de los campesinos, para garantizar el adecuado derecho a defensa de los eventuales perjudicados y que permita normalizar en el corto plazo estas situaciones. Por lo demás, no existen mecanismos legales que permitan un proceso de saneamiento de la propiedad de los predios rurales que permita saber cuál es la situación real en cada zona del país. La falta de regularización en la tenencia de la tierra es un estímulo al desarraigo y la descampesinización.

iii. *La provisión de infraestructura social en asentamientos*

No es posible fomentar el arraigo en comunidades campesinas en las que hay dificultades de acceso al agua potable para la población, en las que no hay electricidad o ésta es sólo monofásica, en las que no hay escuelas o su acceso es difícil, en las que no hay Puestos o Centros de Salud debidamente equipados y con personal idóneo, en las que no hay telecomunicaciones, y falta o es irregular el servicio de transporte público. Otro tanto puede decirse respecto de las vías de comunicación (caminos vecinales y troncales) que no son caminos practicables todo el año.

La gran mayoría de las comunidades campesinas no cuentan con todos los bienes y servicios mencionados más arriba. Esta es una tarea que deben realizarla diferentes reparticiones estatales en mutua coordinación. La insuficiente dotación de infraestructura social en ellas fomenta el proceso de desarraigo y forma parte de un programa político y económico anticampesino.

iv. *La provisión de infraestructura productiva en asentamientos*

Otro tanto ocurre con la infraestructura productiva necesaria: el crédito formal público (proveído a la pequeña agricultura por el CAH o el BNF) no llega sino al 7% de los productores; se ha desmantelado la red de almacenaje de granos y otros productos agrícolas

¹ Mide la concentración de factores. El valor 0 supone equidistribución perfecta; en este caso, todas las familias tienen igual cantidad de tierra. El valor 1 implica que un solo propietario detenta toda la tierra.

que disponía el MAG; la asistencia técnica es de deficiente cobertura, sólo existe para rubros de exportación y desde hace unos tres años ha empezado a ser terciarizada, proceso que ha obtenido hasta el momento muy magros resultados con los pequeños productores; la red de comercialización está en manos de los intermediarios, acopiadores, camioneros, almaceneros, lo cual redundará en una expoliación de los escasos excedentes de los productores dados los precios pagados en finca; la educación agrícola de nivel medio está siendo desmontada y la universitaria está direccionada sólo para ciertos rubros. Sin los insumos técnicos de crédito y comercialización no es viable ninguna producción agraria. La agricultura farmer, en este sentido, sobrevive gracias a las prestaciones ofrecidas por las grandes cooperativas a las cuales se encuentra asociada.

b. Cuestiones medioambientales

La agricultura familiar en el país se ha desarrollado históricamente en ecosistemas degradados. Las tierras a las que tuvo acceso ya habían sido previamente explotadas, principalmente en sus recursos forestales aunque también estaban agrícolamente agotadas. Históricamente el agricultor familiar ha sido también utilizado como fuerza de trabajo para convertir montes raleados en tierra agrícola. Este fenómeno se intensificó especialmente a partir de mediados de la década de los '60s.

i. La recuperación de suelos

Como resultado del proceso mencionado, los suelos se encuentran en estos momentos con graves problemas de fertilidad. Una estimación efectuada recientemente por la Industria Nacional del Cemento afirma conservadoramente, que de manera urgente, la región Oriental del país requiere al menos 2 millones de toneladas de cal agrícola, sólo para corregir los más acuciantes problemas de acidificación del suelo. Algunas organizaciones campesinas, como la MCNOC han incorporado en su agenda del planeamiento productivo de sus organizaciones integrantes, promover la recuperación de los suelos, a los efectos de aumentar la productividad.

ii. Expansión del área sembrada vs. Productividad

En estas últimas tres décadas se han dado paralelamente tres procesos de perjudicial gravitación para la agricultura familiar. Por un lado, una notable expansión del área de siembra de cultivos de exportación (algodón y soja) y en general del área dedicada a agricultura (con escaso aumento de la productividad). Por otro lado, un aumento del área destinada a la ganadería², con particular énfasis en el área cultivada. Con pasturas para engorde de ganado, los dos procesos anteriores generaron un formidable proceso de deforestación. No se registran aumentos importantes en los rindes por hectárea de los

²La carga ganadera en general es baja. A nivel nacional, sobre el total de hectáreas de las explotaciones agropecuarias, el ganado mantenía las siguientes proporciones (cabezas/total de hectáreas agropecuarias): 1956, 0,27; 1981, 0,29; 1991, 0,33. El paulatino incremento de este índice es resultado **de la expansión de las pasturas cultivadas** y de otras prácticas que permiten elevar la carga por Ha, pero el incremento es muy lento y los valores se mantienen (FAO:1992).

principales cultivos, los aumentos de producción, principalmente de los cultivos de exportación se han hecho a expensas del área sembrada y no del aumento de la productividad. Esta es una lógica perversa que desembocará necesariamente en agudos procesos de desertificación, una vez llegado al límite de explotación del área agrícolamente apta.

iii. *El problema de la deforestación*

El desarrollo de una agricultura extractiva en las últimas décadas explica cómo, de la inmensa masa boscosa original, queda sólo un 32,3% de has. Esta agricultura degradadora del medio natural pone en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico. El Paraguay destruye anualmente un área de bosques y pastos equivalente al 1,44% de su territorio, lo que ubica al país como el máximo deforestador del mundo en términos proporcionales: desforesta anualmente 5.888 Km². Con este ritmo de destrucción, teóricamente el bosque se acabará en los próximos 20 años. El impacto de esta agricultura aniquiladora resulta asombroso en la región Oriental, que perdió el 73% de sus bosques en menos de 50 años (de 8.8 millones de has. en 1945 a 2,4 millones de has. en 1991). Sus consecuencias en el ámbito de la erosión genética de los suelos, secamiento y contaminación de las aguas, son evidentes.

iv. *El problema del agua (acuíferos, contaminación, riego agrícola)*

Como resultado de los procesos antes mencionados y el uso cada vez más intensivo del suelo, especialmente por vía de la aplicación de agrotóxicos, la casi totalidad de los cursos y espejos de agua de la región Oriental del país se encuentran contaminados y/o colmatados.

Los recientes descubrimientos acerca del acuífero Guaraní han puesto de manifiesto el efecto contaminante a mucha mayor escala que pueden llegar a tener sobre esta reserva de agua dulce, las actuales prácticas agropecuarias que son en buena medida, el resultado de un modelo de crecimiento basado en la especialización productiva en el que se fomenta el monocultivo.

La enorme disponibilidad de agua del país, a su vez, no se corresponde con la cobertura de agua potable, tanto en zonas rurales como urbana, para la población (que es una de las más bajas en América Latina), ni con la necesidad -en casos de cultivos intensivos- de disponer de riego agrícola.

v. *Las prácticas de cultivo*

Al igual que la tradicional agricultura indígena, la familiar campesina hace un uso hasta si se quiere destructivo de la roza y quema, práctica como se sabe, supone un gran desperdicio de madera, la pérdida de plantas de valor que no estorban mayormente a los cultivos, se pierde un rompevientos o sombra natural, útil para algunos cultivos. La quema de la roza hace perder fertilidad al suelo reduciéndose la posibilidad de hacer más de una cosecha al año de ciertas plantas; por el contrario la roza sin quema conserva el monte y la selva, posibilita más tiempo de uso de una misma parcela, y al permitir un cultivo cada vez más intensivo, la superficie necesaria para una familia es menor, de modo que la expansión demográfica de la finca tendrá efectos menos expulsivos. Pero como lo afirma el propio Bertoni, la ventaja directa más

importante, es sin duda la conservación indefinida de la fertilidad del suelo. La quema entonces, practicada en casi todos los casos en que el campesino hace rozados, es uno de los principales factores de degradación y pérdida de fertilidad del suelo. Evidentemente, la quema incorpora a través de sus cenizas, diversos minerales que estarán a disposición de las plantas cultivadas de manera inmediata. Sin embargo, la práctica continua de la quema, desnuda a los suelos y si éstos son frágiles, la erosión hídrica y eólica en el mediano plazo inducen a su degradación.

A lo anterior debe agregarse la creciente artificialización en el uso del suelo (como se vio son suelos ya magros), uso de arados, en algunos casos tractorización, uso de pesticidas y la inexistencia de prácticas conservacionistas como curvas de nivel, uso de abono verde, siembra directa y el acortamiento o desaparición de los tiempos de descanso de la tierra dentro de determinadas rotaciones de cultivos. Quizá la práctica conservacionista más difundida sea la de los cultivos combinados, que es también una herencia de la agricultura indígena.

Sobre estos aspectos, los gobiernos de las últimas décadas no han tomado la menor iniciativa de capacitar a los pequeños agricultores, quienes, agobiados por la creciente pobreza se vuelven, sin pretenderlo, en agentes de destrucción medioambiental, aunque sin compararse en envergadura con la depredación causada por las grandes empresas agrícolas y el latifundio ganadero extensivo.

vi. *La ganaderización del suelo agrícola*

La mayor parte del ganado nacional es criado en establecimientos extensivos de mediano y gran tamaño (FAO, 1992). La superficie total con pasturas cultivadas (que en 1996 casi no existían) alcanzaban en 1991 (último dato disponible) a 2.2 millones de has. Las praderas naturales (en general de muy baja productividad) llegaban ese año a 12 millones, por expansión de la frontera ganadera (eran sólo 10 millones de has. 10 años antes). Estas cifras dan una idea de la expansión de esa frontera, especialmente de las de pasturas cultivadas, muchas de las cuales se han establecido en Departamentos como los de Caaguazú, Alto Paraná y Canindeyú de neta y exclusiva vocación forestal y en menor medida agrícola.

La carga ganadera es baja: la evolución, según la FAO, es la siguiente: 1956, 3.7 has. por cabeza de ganado; 1981, 3.4 has. por cabeza; 1991, 3 has. por cabeza. El rinde promedio de leche por cabeza del ganado lechero es de 3 litros por día. Esta información indica: fuerte expansión de la frontera ganadera (más tierra para la ganadería) a costa incluso de la frontera agrícola y sobre todo, de la destrucción de montes naturales; baja carga por unidad (extensividad) y bajos rendimientos lecheros.

vii. *El ordenamiento territorial*

Las constataciones derivadas del modelo de colonización implantado durante las últimas décadas muestran que: i. la colonización sólo parcialmente pudo cumplir con el cometido de descongestionar áreas minifundiaras antiguas, ii. los objetivos estrictamente económicos arrojan resultados aún más negativos; la mayoría de los campesinos asentados se vio sujeta a fuertes procesos de diferenciación, iii. tampoco fueron favorables los logros en los planos de la integra-

ción y organización social y política, como resultado -entre otros factores- del modelo físico adoptado y de la escasa autonomía y participación de los beneficiarios en la implementación de los planes de colonización, iv. los resultados medioambientales fueron asimismo negativos, por la distribución no apropiada de los suelos y recursos hídricos al interior de los asentamientos (FAO, 1996 b.).

En resumen, no se han utilizado métodos de asentamiento que produzcan la posibilidad de arraigo. Predominaron los métodos de colonización que no permitieron el desarrollo de procesos organizativos, comunes en otros países y propios de la vida social campesina. Además, el modelo de asentamiento -basado en el diseño cuadrícula- ha contribuido para el mal manejo de los recursos naturales y la no preservación del medio ambiente.

c. Aspectos institucionales y jurídicos

i. La obsolescencia del sistema institucional del sector

Los arreglos institucionales dispuestos por el gobierno paraguayo, además de desactualizados³, son altamente ineficientes y dilapidadores de recursos. Ya en 1990, una Misión Interagencial organizada por la FAO y reunida en Asunción, al hacer un diagnóstico sobre el tema (FAO, 1996), ha enfatizado la necesidad de una adecuación y fortalecimiento institucional, en especial del MAG y del IBR, los cuales deben "introducir cambios sustantivos e inmediatos" para garantizar una eficacia mínima en su accionar. Entre los problemas que entorpecen más directamente el desempeño institucional, se menciona la descoordinación y la tendencia a la disolución de responsabilidades, la falta de jurisdicción del IBR para hacer cumplir los planes de trabajo, la escasez de recursos financieros con los que opera el conjunto del sistema, así como la baja consistencia de la información disponible sobre las características socio-demográficas, catastrales y jurídicas de la sociedad campesina en general, y en particular, de los beneficiarios del programa de apertura de nuevos asentamientos⁴.

La reforma del marco institucional y jurídico está expresando, administrativa y jurídicamente, los fuertes intereses de tipo político que giran en torno a la gran propiedad de la tierra, los precios agrícolas y la comercialización, la canalización de los flujos financieros y el negocio de la agroexportación (Palau y Teófilo, 1992).

ii. Los problemas de la legislación agraria

En buena medida, el marco institucional inadecuado es resultado del marco legal existente en el país con el que se rige la sociedad agraria⁵. El mismo es incompleto, en la medida que no ha

³ La disposición legal que regula al Ministerio de Agricultura y Ganadería por ejemplo, es el Decreto Ley No. 13681 que data del 4 de agosto de 1950. Según uno de los titulares de la cartera durante el gobierno de Andrés Rodríguez, "la actual estructura orgánica no permite un desarrollo rural acorde con las expectativas del pueblo paraguayo".

⁴ Estos rasgos están tratados con más detalle en Palau (1991).

⁵ Constituido básicamente por algunos artículos de la Constitución hasta ahora vigente (Nos. 106 al 110, 129 y 132), y las leyes 622 y 662 de 1960 y la 853 de 1963 que establece el **Estatuto Agrario**, además de otras leyes y dispositivos que crean o reforman las diferentes reparticiones públicas encargadas de la cuestión agraria, y los planes sectoriales elaborados por el MAG y la Secretaría Técnica de Planificación (STP).

reglamentado varios artículos constitucionales y en particular los referidos al derecho de todo campesino a la tierra propia y el que se refiere a la libertad de agremiación. Estas omisiones contrastan con la profusión de leyes, decretos y reglamentaciones que amparan al sector empresarial y semi-empresarial con intereses en el sector agrícola.

Por lo demás, aún cuando existe en la letra, ya sea por las características políticas del régimen, ya sea por los patrones (normalmente especulativos) de acumulación predominantes, la vigencia del legalismo proclamado forma parte de la lógica del doble discurso. Las demandas legales o legítimas del campesinado no son normalmente procesadas por los organismos administrativos correspondientes.

d. Aspectos económico/productivos

i. El crédito agrícola

Datos del Censo Agropecuario 1991 revelan que solo el 34% de los productores censados cuentan con créditos. Al cotejar las fuentes, se tiene que el 21% del total de productores obtiene crédito de acopiadores y comerciantes, mientras que el 6% tiene acceso a la banca privada ya sea directamente o a través de cooperativas. La cobertura de la banca pública apenas llega al 7% de los productores y a diferencia del crédito informal, el crédito oficial se distribuye preferentemente entre productores con más de 20 hectáreas (Dietze, 1992).

El crédito al que acceden mayoritariamente los campesinos es el informal, a través de acopiadores. Este es un crédito de muy alto costo financiero, atado a un cultivo y no a la capitalización de la finca, al mejoramiento del suelo o a otra finalidad de desarrollo, lo cual refuerza el monocultivo.

Los campesinos pobres del país tropiezan con múltiples problemas para acceder al crédito: carencia de garantías reales o poco valor de las mismas, montos bajos e incompletos, trámites burocráticos engorrosos y préstamos de corto plazo, es decir, de pronta recuperación. La carencia de crédito diversificado, otorgado oportunamente para actividades de corto, mediano y largo plazo en las UPF imposibilita la construcción de infraestructura (silos, galpones, depósitos) para preservar en condiciones adecuadas sus cosechas, niega también la posibilidad de incursionar en cultivos permanentes (frutales, reforestación, etc), de igual manera impide la conservación y recreación del medio (terrazas, curvas de nivel, rompevientos, etc.).

Debe tenerse en cuenta que el acceso al crédito está constitucionalmente garantizado. En efecto en el Art. 115, inc. 6 se lee: “Garantía de crédito:” el otorgamiento de créditos agropecuarios, a bajo costo y sin intermediarios”.

ii. La comercialización y el almacenamiento

La modalidad más común de acceso de los campesinos es a través de agentes del mercado que llegan al productor por medio de eslabones sucesivos de intermediación, entre los cuales el acopiador local ocupa un rol privilegiado, ellos son quienes controlan todos los tipos de vínculos entre el productor y el mercado. Son problemas típicos, los bajos precios pagados en

finca, y la compra anticipada que traslada al productor los costos de comercialización (costo de flete, ensilaje y otros). En cuanto a los rubros destinados al mercado interno, se identifican los siguientes problemas: estrechez del mercado, deficiente infraestructura, falta de apoyo a la producción y comercialización, falta de desarrollo de la demanda, y la falta de una estrategia productiva nacional. Todos estos problemas en relación al capital y la tecnología, hacen que la capacidad de la familia productora descansa principalmente en la disponibilidad de mano de obra familiar y eventualmente en la capacidad de contratar a terceros.

iii. *La diversificación productiva*

Los entes públicos de crédito, las instituciones ligadas a la política agropecuaria (MAG) y desarrollo rural (IBR) no están enmarcados en un solo sistema coherente que oriente y priorice el desarrollo, considerando las políticas diferenciadas, la diversificación agrícola y como eje la agricultura sostenible. El estado actual del crédito, profundiza la pérdida de la seguridad alimentaria por cuanto estimula solo ciertos cultivos de exportación, debilitando en consecuencia la estrategia campesina de la diversificación agrícola. Esto implica a su vez una visión no integrada de las unidades productivas familiares en términos de sus relaciones y complejidades. Tan importante como mirar y reflexionar por qué un alto porcentaje del campesinado es considerado “inviabile”, es reflexionar sobre la tipología de los “viables” y comprender qué les sucedió, cómo la diversificación y la combinación agricultura-ganadería explican mejores niveles de ingreso y cómo la productividad del trabajo es superior a las otras fincas. Ahí están los elementos para una verdadera política diferenciada de la que tantos hablan, pero que no son considerados en la formulación de las políticas públicas supuestamente dirigidas a los agricultores familiares campesinos.

iv. *La autosuficiencia alimentaria: ¿una utopía?*

El patrón tradicional del sistema productivo campesino está basado en la diversificación productiva. Según éste, la prosperidad campesina no es percibida como la producción en gran escala de un cultivo de renta, sino ajustada a un modelo de seguridad alimentaria y de estabilidad ante las contingencias climáticas y del mercado agrícola, por medio de la diversificación agropecuaria. Este modelo está condicionado al nivel de tecnología y a la mano de obra familiar disponible en cada finca.

El estado actual de los servicios que llegan a la pequeña agricultura de base familiar (crédito, asistencia técnica, circuitos de comercialización, facilidades de almacenamiento y otros) regidos por el modelo de crecimiento “hacia fuera” con exportación de productos primarios, disminuye la seguridad alimentaria y en consecuencia, agrava las condiciones de empobrecimiento, no solo de la población rural, sino la de los consumidores urbanos.

Las prácticas de diversificación productiva y seguridad alimentaria están íntimamente unidas. Se constata en el Paraguay rural actual, que las acciones sectoriales atentan directamente contra ellas, quizás con el propósito deliberado de aumentar la dependencia alimentaria, el arma más eficaz de control político de la población.

v. *El contrabando de productos agropecuarios*

Según los informes del BM, de todo el comercio exterior paraguayo, solo el 49.5% está registrado, el resto es contrabando (tanto en mercaderías ingresantes como salientes). Entre los rubros que ingresan, un importante porcentaje está compuesto por rubros agrícolas o son productos industrializados de origen agrícola (harina, chacinados, azúcar y otros).

Desde comienzos de la década de los setenta el problema se agudizó, hasta el punto que ha sido uno de los mecanismos más efectivos de desmantelamiento de la agricultura campesina. El Paraguay, desde esa fecha, ha operado en la práctica como un país “integrado”, en el sentido de integración regional (sin MERCOSUR y sin ALCA). La producción hortícola, frutícola, de tubérculos (incluyendo la mandioca y el almidón) y granos, se arruinó por efecto del ingreso ilegal de dichos productos desde los países vecinos.

vi. *Los temas pendientes con Cancillería (el comercio agrícola y los organismos multilaterales)*

Son variadas y ricas las relaciones que podrían existir entre los productores agrícolas y la Cancillería nacional. Sin embargo, pueden enumerarse al menos los siguientes elementos disfuncionales:

Por un lado, se requiere del *saneamiento de las embajadas paraguayas en el exterior*. Actualmente las legaciones diplomáticas paraguayas son de corte eminentemente político (salvo algunas excepciones). Las representaciones comerciales en las mismas cumplen un papel apenas figurativo y no están puestas en función de apertura de nuevos mercados para la producción nacional. Adolecen además de falta de personal calificado, un exiguo presupuesto operativo (cuando existe) y notables deficiencias en materia de manejo de información actualizada. En no pocos casos el criterio político-partidario con el que es nombrado el personal diplomático, hace que estas representaciones se conviertan en espacios de reproducción de la corrupción imperante en el país. En estas condiciones es muy limitado el alcance de las mismas como “sensores remotos” para la activación productiva nacional.

Por otro lado, se constata una fuerte *corrupción de los organismos internacionales*. El Paraguay es un país que por sus niveles de pobreza, es elegible para un importante volumen de ayuda no reembolsable, para la aplicación de proyectos que apunten al desarrollo de los sectores más vulnerables de la población, entre los cuales se encuentra, obviamente, el campesinado. Esta ayuda no es aprovechada ya que los encargados de gestionar la cooperación internacional prefieren apelar a créditos, los cuales generan importantes “comisiones” para sus gestores políticos a nivel local.

Además, buena parte de los proyectos de la cooperación internacional, como se vio, casi todos ellos reembolsables (y por lo tanto formando parte de la deuda externa del país) incorporan la presencia de “expertos” extranjeros (normalmente funcionarios o amigos de esos organismos) que abultan innecesariamente los préstamos que posteriormente deben devolverse. La malversación de buena parte de esos fondos por las autoridades locales, no podría comprenderse sin la complicidad de estos funcionarios internacionales y sus instituciones. En

este sentido, debe señalarse que la ejecución de esos proyectos (muchos de los cuales son perfectamente prescindibles y aceptados solo por la presión que los mismos organismos ejercen para aceptarlos), es absolutamente irregular. No existen mecanismos efectivos de fiscalización y seguimiento que garanticen el uso correcto de esos recursos.

Finalmente, el desarrollo rural paraguayo implica la realización de un estrecho seguimiento de los acuerdos y tratados internacionales en los que el Paraguay está involucrado, especialmente los que se refieren al: ALCA, UE, OMC, WEF (transnacionales) y otros. El trabajo de la Cancillería y otras dependencias especializadas del gobierno (tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo) no cuentan con los recursos –humanos y presupuestarios- para llevar a cabo un trabajo de seguimiento permanente, ni de formulación de políticas explícitas sobre la posición que el gobierno debiera adoptar ante estos organismos. La posición paraguaya es siempre cortoplacista y oportunista, vale decir, tratando de sacar el mejor provecho posible de circunstancias coyunturales, y/o desarrollando un comportamiento institucional obsecuente con respecto a las directrices apuntadas por embajadas importantes o intereses privados o corporativos.

e. Aspectos culturales

Según Meliá (1999) en el Paraguay han subsistido dos modelos de economía que conviven y se desbaratan mutuamente; la economía de la producción (sea ésta destinada o no al mercado) y la de succión (vulgo: picardía, zoquete). Es a esta forma de economía extractiva que se achaca, y con razón, la privación, el despojo, la escasez y en general, todas las carencias. Estas formas de economía se pueden contraponer como la economía del agricultor y la del cazador. Lo que el autor hace con ello es criticar las formas de apropiación teóricamente ilimitada y prácticamente excluyente de las economías coloniales de mercado. Para él, “la corrupción económica hay que buscarla inicialmente en la alteración y trastrueque de las formas de economía incluyentes, para dar paso al modelo y prácticas excluyentes. La política del Estado real permite la acumulación de bienes en unos a costa de la exclusión de otros”. En este sentido, la cultura expresa de varias formas simbólicas esa apropiación indebida e injusta y la distribución con falta de equidad.

i. Referidos a formas tradicionales y alternativas de ocupación de la tierra.

En esa mezcla de prácticas agrícolas reales (cultura productiva) con el bagaje simbólico de lo extractivo (cultura cazadora), enmarcado en “valores” recientemente incorporados como los del individualismo y la propiedad privada, es que se debate infructuosamente el campesinado: sin tecnología, sin acceso a mercados, con imágenes culturales inviables hoy en día, sin protección y culturalmente avasallado por los mass media.

Parte de esa imagería es la del lote propio. Pero resulta claro que, con una Tasa Global de Fecundidad de la mujer rural de 4.7 hijos, con la apropiación fraudulenta y/o especulativa de la tierra y con la descampesinización, el futuro del campesinado no pasa precisamente por “el

lote propio para cada familia campesina”⁶. Es necesario que la familia rural vaya haciéndose a la idea de formas alternativas de propiedad u ocupación. Propiedad comunal, propiedad cooperativa, en fin, formas de apropiación y explotación comunitaria de la tierra y la producción de sus derivados. Por el momento, tales planteamientos resultan culturalmente chocantes pero será la realidad del futuro inmediato la que modifique esas pautas, esperablemente por la vía del convencimiento y no por la de la descampesinización completa.

ii. *La juventud rural: entre el paternalismo y la exclusión*

La sociedad rural paraguaya, además de ser profundamente machista es también gerontocrática; los y las jóvenes (hasta la formación de una pareja estable) no son sujetos de plena confianza. Este acendrado paternalismo, junto a los factores de tipo socioeconómicos e institucionales, generan condiciones predisponentes de vulnerabilidad que exponen a la juventud rural a la exclusión social (Caputo y Palau, 2002). Si a esto se agrega la falta de tierra (con el potencial simbólico que ello representa en términos de autorrealización), la falta de oportunidades laborales, la temprana deserción escolar, las restricciones para el acceso a la salud y otros factores adversos, es posible advertir que la juventud rural está expuesta a un futuro, por decir lo menos, incierto.

iii. *La marginación y explotación de la mujer rural: machismo y atraso.*

De acuerdo a declaraciones de organizaciones de mujeres rurales e indígenas (CONAMURI) los principales problemas que afectan a la mujer rural son los siguientes: i. falta de reconocimiento del trabajo de las mujeres en la producción, ii. no reconocimiento de sus derechos por discriminación, iii. falta de apoyo efectivo del gobierno para las productoras: no hay apoyo técnico, créditos, comercialización, artesanía y otras industrias, iv. falta de atención eficiente en salud a mujeres y niños y niñas, v. no priorización del gobierno a la educación campesina y con programas de alfabetización, vi. falta de valorización de la cultura y la identidad propia en lo referido a salud alternativa, germoplasma, medio ambiente. Se mencionan también las dificultades de la participación de la mujer en las organizaciones y actividades de capacitación, falta de confianza en las mujeres en la organización, liderazgos masculinos autoritarios en las organizaciones, sobrecarga laboral en tareas productivas y reproductivas, falta de autoestima de la mujer rural, división producida por los partidos políticos, al igual que por las sectas religiosas, falta de escolaridad⁷.

⁶ “El individualismo es un factor que obstaculiza la conformación y consolidación de la asociación hemos perdido todo esos valores de la solidaridad, el famoso minga, el ojopói y compañía. Hay que volver a inculcar todos esos valores que tenía el paraguay para que pueda entender la importancia de la asociación y finalmente el tema de la propiedad individual que está promocionada por todos los medios y por todas las instituciones en donde también se mezcla con cuestiones ideológicas, para que la gente pueda entender que esta también es una propiedad privada solamente con una función social y no totalmente privada e individual”. Entrevista a Tomás Zayas.

⁷ Parte de estas reivindicaciones han sido expuestas también en CPC (1996)

iv. La alteración de los patrones de consumo

En un trabajo ya relativamente antiguo (Heikel, 1991), se mostró documentadamente que en la población de barrios marginales de Asunción, la mayoría de ellos migrantes recientes de zonas rurales, los patrones de consumo tanto de alimentos como de combustibles, habían cambiado de manera sustantiva. Se observaban alteraciones en el patrón de consumo alimentario de la población, tanto en los estratos altos (con caída de la demanda por rubros de producción campesina tradicional, como maíz, poroto, maní, batata, mandioca) y su sustitución por producción alimentaria industrial, como en los estratos bajos, sustituyendo aquellos rubros tradicionales por otros de cocción más rápida⁸. En resumen, se pasa de combustibles renovables (leña) a GLP, o a una combinación que incluye gas. En alimentos, de productos de cocción lenta (porotos, tubérculos) a aquellos de cocción rápida (en base a hidratos de carbono, o chacinados baratos). Esto implica una caída en la ingesta calórico-proteica (se pasa del payagua mascada a la hamburguesa, al decir de B. Meliá) lo cual a su vez supone una sensible pérdida en la calidad alimentaria de la población.

Así como se ha alterado el consumo de alimentos y combustibles, también la población rural experimenta cambios en el consumo de bienes culturales: música, tipo de distracción, de vestimenta, de materiales de construcción, de insumos productivos agrícolas.

Estos cambios tienen en común el hacer más dependiente al consumidor rural de bienes y servicios no producidos por ellos mismos. Este aumento de la dependencia consumista exagera la necesidad de dinero efectivo, lo cual impulsa –en el mejor de los casos- a insertarse en planes productivos de cultivos de renta, o a formas anómicas de comportamiento social.

2. El escenario futuro de arrastrarse las tendencias recientes

Las tendencias observadas muestran:

- un creciente empobrecimiento de la población rural, principalmente campesina

- un incremento de la migración rural-urbana

- una marcada tendencia al deterioro de los suelos (desertificación)

- deforestación masiva

- riesgo probable de aumento del autoritarismo

⁸ Debido a la rápida inserción de la mujer popular al mercado de trabajo y su menor disponibilidad de tiempo para cocinar, así como por el encarecimiento de los combustibles domésticos (Heikel: 1991).

Como puede fácilmente apreciarse, el futuro de mediano plazo del Paraguay, de no haber un expresivo cambio de orientación política en el gobierno y una radical reorientación de las políticas económicas, se asemeja notoriamente a la situación hoy vivida por varios países del Africa sub-sahariana.

3. La coyuntura agraria en el país

Expresada de la manera más general, la coyuntura agraria del país⁹ es el reflejo de una estructura, de un modelo. El esqueleto de esa estructura y los componentes del modelo tienen piezas, o si se quiere, determinantes, que están tanto dentro como fuera del país. En este apartado no se hace referencia a los factores externos (que tienen que ver con la aplicación a escala mundial del capitalismo neoliberal). No obstante, se asume como principio, el planteamiento de los Calcagno (2002) en el sentido que los políticos que hoy conducen el gobierno son gerentes de los verdaderos dueños del país¹⁰. En el caso paraguayo los dueños son: el capital financiero, el gobierno norteamericano (y más específicamente el FMI), las multinacionales instaladas en el país (principalmente en el agro), los que dominan el contrabando y tráfico de sustancias y la oligarquía ganadera.

De manera esquemática, para considerar la actual situación agraria del país, tómesese en cuenta el diagrama de la página siguiente a los efectos de conocer el encadenamiento de los factores políticos y económicos que determinan la situación del campesinado y las alternativas posibles.

En el ámbito *político*, el actual gobierno se debate ante una gran deslegitimidad por parte de la ciudadanía y una manifiesta situación de ingobernabilidad. La principal fuente de esta deslegitimación y desgobierno es la generalizada *corrupción*. No es este el lugar para detallar el funcionamiento de este mal en el país, pero sólo en lo que se refiere a la situación agraria, se ha manifestado de diferentes maneras afectando al sistema institucional y a los fondos disponibles. Considérese por ejemplo las múltiples denuncias de organizaciones campesinas e incluso políticos locales acerca de la proliferación de funcionarios coimeros de IBR, las denuncias del parlamentario Llano sobre la “fábrica de planilleros” que es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde se contabilizan al menos mil funcionarios que “cobran sin hacer nada”. El negociado con la compra de los tubos matapicudos para el algodón por parte de este mismo Ministerio, o las fuertes dudas y suspicacias que despierta la aplicación de las facilidades impositivas a la maquila en el sector agrícola, que es considerada una maniobra para la evasión de impuestos por parte de ciertas empresas beneficiadas por el tráfico de influencias.

⁹ Se trata de una coyuntura larga cuyos trazos empezaron a insinuarse a partir de los acontecimientos de 1989.

¹⁰ “Hasta ahora, sólo se plantea que se vayan los gerentes, con lo que la situación no cambiará mucho. Incluso a los dueños no les interesa ahora mantener a gerentes ineficientes y corruptos, aunque en el pasado dieron muestras de lealtad infinita. Si se van los gerentes y no ocurre nada más, los dueños pondrán a otros para que sigan defendiendo sus intereses. Es la base del discurso que limita el problema a la ética en términos de personas: pongamos gente honesta que todo mejorará. No es así. Porque la corrupción no es un efecto perverso del modelo, sino la instancia política necesaria para su reproducción en el tiempo. No se trata de poner gerentes éticos al frente del saqueo, sino de cambiar de esquema y echar a los dueños” (4).

Asimismo, durante los últimos meses han sido innumerables las denuncias acerca de la intensificación del *contrabando*. Una publicación reciente del diario brasileño O Globo menciona que “el contrabando de Paraguay hacia Brasil cuadruplica a las exportaciones”. Según esta publicación el valor de las mercaderías ingresadas a Brasil de contrabando desde nuestro país asciende a U\$ 1.200 millones a través de Ciudad del Este. Esta es sin embargo, la preocupación brasileña, la del productor paraguayo se centra en el contrabando desde el Brasil y la Argentina.

En efecto, el contrabando afectó este año a productores cañeros (aunque aumenta exportación de azúcar orgánica, 95% de la exportada es orgánica), a los industriales lácteos, criadores de aves, productores de almidón, productores frutihortícolas (el 53% de productos frutihortícolas que se consumen en el país es de origen extranjero). Todos estos sectores han sido muy duros en sus críticas hacia el MAG, organismo al que se le atribuye la principal responsabilidad de este ilícito.

Al aumento del contrabando durante el año 2002 ha contribuido además la fuerte devaluación del peso argentino, y más recientemente la devaluación del real (meses antes de la elección de Lula). Además de hacer crecer el contrabando se ha registrado una fuerte caída en las exportaciones paraguayas.

Esta corrupción que se manifiesta en su dimensión económica, tiene su correlato en el plano político con la manipulación político-partidaria que hacen los partidos tradicionales (principalmente el partido de gobierno) de las necesidades de un pueblo empobrecido y en buena medida desmoralizado, entre el cual el campesinado es mayoría. Esta situación se viene acentuando durante los últimos meses del 2002 debido a la proximidad de las elecciones internas de los partidos y la general de abril del 2003.

En el ámbito más estrictamente *económico*, el encuadre general que permite interpretar la coyuntura está dado por las fuertes presiones del FMI para la profundización en la aplicación de políticas de “liberalización” económica. El gobierno tuvo que retroceder en junio, en sus intentos de privatizar dos de las principales empresas públicas del país y en modificar la ley de Bancos, pero las acciones en esta dirección continúan. Por exigencias del FMI en agosto el Ejecutivo lanza la idea de hacer aprobar una “Ley de transición económica”, de reducción de gastos, una nueva movilización popular vuelve a pararla, al menos en sus artículos más dañinos para la producción agraria (precio del gasoil, impuesto a las exportaciones y otros).

En este contexto, el empresariado paraguayo da muestras de una gran miopía corporativa al apoyar dicha ley (a excepción de la AIP), aunque percibe la desastrosa situación de las finanzas públicas, debido sobre todo a las presiones presupuestarias ejercidas por el pago de los servicios de la deuda externa (con atrasos de U\$ 25 millones a julio pasado). Así, propone tibiamente una operación de *swapping*, canjear parte de la deuda externa con productos agropecuarios.

Las políticas neoliberales producen –tal como está demostrado para América Latina- recesión. La combinación neoliberalismo + corrupción conducen necesariamente a ella. Se observa así

durante el año un crecimiento del gasto público en 14% (hasta agosto), los ingresos globales del gobierno cayeron un 0.6%, aumentó el déficit fiscal (por aumento en servicios personales, compra de bienes y servicios principalmente) que se estima será del 2.4% del PIB al finalizar el año.

Por otro lado, en el ciclo 2001/02 las pérdidas en el sector agrícola se estimaron en U\$ 130 millones, según la Capeco (cámara de productores de semillas oleaginosas). Los ganaderos (sector altamente privilegiado) nucleados en la ARP llegaron incluso a pedir un refinanciamiento de sus deudas contraídas con la banca pública. En materia de crédito, fuentes autorizadas del CAH han ya adelantado que este banco no podrá recuperar Gs. 20 mil millones debido a la fuerte descapitalización de sus prestatarios. Por otra parte, los importadores de maquinarias agrícolas informaron que la venta de tractores y cosechadoras cayó un 75% en los últimos años. Con lo cual están afirmando que incluso la agricultura farmer y mecanizada ha caído en una importante recesión. Sobre este punto, la FECOPROD intervino diciendo que los costos elevados de los insumos por efecto de la suba del dólar son los que están impidiendo la inversión en maquinarias. En el ámbito campesino se manifestó también un conflictivo malestar entre los cañeros de Iturbe por el no pago por parte de la caña entregada por los productores quienes llegaron a bloquear el acceso a la fábrica. Otros cañeros protestaron también en diversos puntos del país por los bajos precios. En Katueté, una zona de agricultura farmer, los productores agrícolas reclamaron no estar recibiendo apoyo alguno para la producción agrícola. En síntesis, según un técnico ligado al MAG, la crisis institucional es la que está frenando al agro.

Aún a riesgo de ser reiterativo las políticas económicas adoptadas por el gobierno hacia la agricultura, están llevando al desmantelamiento productivo del sector. Considérese para el efecto los siguientes datos: el propio MAG estima que el crecimiento agrícola descenderá en el ciclo agrícola 01/02, ya que la producción de soja cayó de 3.2 millones de toneladas a 2.9. Algo similar ocurrió con el algodón. Para el próximo ciclo, que se inicia en octubre 2002 el Ministerio del ramo considera que también se reducirá el cultivo de soja. Un meta conservadora de 1.7 millones de has. no podrá alcanzarse, apenas se llegará a 1.5 (esto implica entre 180 y 200 millones de U\$ menos para los productores). Las estadísticas del MAG revelaron que siete rubros agrícolas registraron durante el 2002 una fuerte caída: soja, maíz, algodón, maní, girasol, arroz y tabaco.

Aún cuando pudiera pensarse que la suba del dólar iría a beneficiar a los exportadores, la realidad muestra otra cosa: el componente importado de las exportaciones es tan alto que la pérdida en compra de insumos compensa las ganancias en la venta. Hay algunas excepciones a esto en el caso de pequeños productores que no requieren de insumos importados, tal fue el caso de los productores de banana que lograron ubicar importantes partidas en el mercado uruguayo.

Otros hechos muestran el carácter netamente anti-productivo del gobierno y de las políticas que implementa. Este es el caso del dictámen negativo del Ministerio de Industria y Comercio a adoptar medidas a favor de la producción de biodiesel, la cual hubiera tenido un efecto notable de reactivación productiva, no sólo de la producción primaria sino -y sobre todo- de la industrialización de la commodity. No hace falta imaginación para ver por detrás, el fuerte

dominio de las transnacionales del petróleo para tal determinación. El desmantelamiento productivo se acentúa con el cierre de fábricas que procesan productos primarios de origen agrícola, como en el caso del cierre de la Hilandería Genovese. Mientras tanto, la corporación de industriales, reunidos en la UIP, sigue haciendo gala de su orfandad intelectual, afirmaron al respecto que, a pesar de todo, "no creemos en el modelo de sustitución de importaciones ni en la protección de ciertos sectores productivos".

Como resultado de este cuadro recesivo provocado por las medidas de corte neoliberal, se verifica también una *reducción del gasto social y las inversiones públicas*, aunque estos recortes abarcan la generalidad de los servicios sociales (salud, compra de tierra, vivienda, fondos destinados a indígenas, y otros), durante los últimos meses ha abundado la información acerca de la desprotección de la educación rural y agrícola (la que se imparte en los bachilleratos diversificados): trascendió así que el MAG y el Ministerio de Educación han llevado a una literal crisis a las escuelas agrícolas. Desde marzo de 2002 éstas no reciben ningún desembolso, se anunció igualmente que tendrán un recorte del 70% a partir de agosto y que para el 2003 tendrán un recorte adicional del 41%. Por otra parte la prensa es pródiga en informaciones acerca del lamentable estado de las escuelas rurales en varios puntos del país (hay especial referencia a las del Departamento de San Pedro y a la zona de Curuguaty).

Además de lo referido a la educación, la situación de abandono de los asentamientos es constante, tal es el caso concreto que trascendió, del reclamo de asistencia en el asentamiento, Cruce Tacuara, Calle 10.000, Santaní realizado por la FNC. Pero esta situación puede considerarse generalizada.

Abandono a los asentamientos e *inseguridad jurídica* sobre la tenencia de la tierra por parte de la sociedad campesina, indican (por misión) políticas públicas explícitamente destinadas a desalojar el campo de campesinos. La tierra rural y la producción de alimentos y commodities son mercancías altamente valoradas por el capitalismo especulativo neoliberal. Desde hace varios años el país está presenciando este desalojo de sus tierras al campesinado para proceder a la ocupación empresarial del campo.

Durante los últimos meses los casos de desalojos han sido cada vez más frecuentes: en Mil Palos (R.A. Oviedo), en Yuty, en Alto Verá y otros casos aún más graves de desalojos en los que los campesinos, ya sea por necesidad ya sea instigados por políticos locales, han ocupado o reservas ecológicas (caso de la colonia Yvypytá en Ygatimí) o asentamientos indígenas (como el caso de Arroyo Claro en Itapúa). Coincidentemente este aumento en el número de desalojos se durante el período en que el IBR anunció que no podrá usar la ampliación de Gs. 16 mil millones obtenida en el 2001 para compra de tierra por falta de desembolso de Hacienda. Esta es también una reducción del gasto social. El renunciado ex ministro de Agricultura, Lino Morel, había sido bastante claro al respecto: "Falta seguridad jurídica, por esto no hay inversión. "los campesinos solucionarán sus problemas sólo si ocurre un milagro". Ese milagro faltante es el del diseño e implementación de políticas sociales rurales a favor del campesinado.

Como se apuntó más arriba, lo anterior tiene sus éxitos para el gobierno y el capital especulativo: el desarraigo continúa (se estima que anualmente unas 100 mil personas abandonan el campo y migran a algún centro urbano).

En cuanto a los *factores ambientales adversos*, debe apuntarse que, más allá de la prolongada sequía que afectó al país durante casi todo el año en algunas zonas y que produjo sensibles pérdidas en la producción principalmente campesina, continúa la depredación de los recursos naturales. La última noticia espectacular al respecto es la venta de parte de las reservas del Cerro Chevoreca en el Chaco a un estanciero particular. La compra de unas 400 mil hectáreas por parte de una empresa perteneciente a la secta Moon también en el Chaco, o la invasión de que fue objeto el Parque Defensores del Chaco en el distrito de Filadelfia, Chaco, por parte del Cnel. (SR) Dionisio Chávez Altumann. El nivel de deforestación a que llegó el país se refleja en un dato dado por el gremio de los madereros: Paraguay importó en el 2001 productos forestales por U\$ 2 millones, exportó por U\$ 69 millones. Esto es, el país empieza a importar madera. La degradación del suelo, quizás el más importante efecto de la agricultura intensiva, de la práctica de la roza y quema, del uso intensivo de agrotóxicos, de la deforestación, sigue siendo uno de los principales temas técnicos abandonados por el gobierno y las políticas sectoriales. Como si fuera poco, un proyecto orientado a paliar este problema fue puesto en el tapete. La cooperación alemana exigió transparencia en el uso de los fondos en el caso del proyecto Mejoramiento de la Fertilidad del Suelo, que el gobierno negoció con la GTZ por un valor de U\$ 7 millones.

Todo este saqueo, al decir de los Calcagno, motivó que durante el año las organizaciones campesinas y gremios de productores medianos y grandes se movilizaran. Dichas *movilizaciones* tuvieron, durante el 2002, bastante más éxito que en años anteriores. Se realizaron varias, entre ellas:

Marcha campesina de la MCNOC, el 20 de febrero. FNC marcha en 20 marzo por la banca pública. Marcha campesina de la MCNOC, el 17 de abril. Conformación, el 15 de mayo del Congreso Democrático del Pueblo, quizás el hito histórico más importante de los últimos años en lo que a organización social se refiere, en el país. Marcha conjunta de la FNC con la MCNOC por el rechazo a las privatizaciones, a la reforma de la banca pública y a otras demandas, durante la segunda quincena de mayo y principios de junio. Esta marcha conjunta frenó las privatizaciones de Copaco y Essap. En esa ocasión, el PE dispuso que el ejército salga a las calles si fuese necesario. En agosto se firma un compromiso de unidad entre organizaciones campesinas de San Pedro. En octubre la Plenaria Popular realiza una Campaña para la reforma del Presupuesto General de Gastos de la Nación y contra el ALCA. En este contexto se realiza una movilización de CONAMURI contra el ALCA.

Por su parte los agricultores farmers, nucleados en la Coordinadora Agrícola del Paraguay (CAP) solicitó, semanas antes de que se produjera, la renuncia de Lino Morel, y la del Vice ministro de Agricultura Carmelo Peralta. Esta Coordinadora consideraba que los fondos para el financiamiento de soja son insuficientes. Proclamaban que si el gobierno pretende recaudar más, que roben menos. Se oponía a la suba del gasoil. Denunció el mal uso de las letras de regulación monetaria. Manifestó su oposición a la suba del IVA agropecuario. Por todas estas demandas se realizó el III Tractorazo la semana del 23 de setiembre hasta el jueves 26, terminó con fuerte una represión en Edelira. Aglutinó a 60 organizaciones.

Además de estas movilizaciones mayores, continuaron las de los afectados por la represa de Yacyretá, que no cobran las debidas indemnizaciones. Continuaron también los problemas con los campesinos de Cordillera por la destitución de un alto funcionario de la Gobernación perteneciente a una organización campesina. Además, ya durante octubre, la MCNOC empieza a solicitar la aprobación de una ley de protección territorial contra brasileños, que había sido presentada por un diputado al Parlamento.

El clima social de las organizaciones de productores rurales, campesinos o no, es pues de efervescencia; resultado directo de la desastrosa gestión de la administración González Macchi en materia de atención a los problemas del sector. El desenlace más probable de esta situación de desgobierno, de corrupción, aplicación irreflexiva de políticas neoliberales, inseguridad jurídica sobre la ocupación de la tierra, destrucción imparable de los recursos naturales y creciente conflictividad social, pasa necesariamente por un aumento de la represión¹¹, cuando no, de una vuelta al autoritarismo como régimen de gobierno, alternativa nada improbable en el caso de darse el triunfo de Osvaldo Dominguez Dibb en las internas coloradas y en las elecciones nacionales de abril próximo.

Bibliografía

Caputo, L. y T. Palau (2002) **Juventud y exclusión social en el Paraguay**, Informe Final, Asunción, BASE- Investigaciones Sociales/BM/PNUD

Dietze, R. y otros (1992) **Hacia una política de uso de la tierra en Paraguay**, Asunción, Proyecto de Planificación del Manejo de los Recursos Naturales, GT/MAG/GTZ, 2ª. Ed.

FAO (1992) **Ganadería bovina y producción de carne en Paraguay, 1960-2010: análisis y proyecciones**, Asunción, STP/MAG/FAO, Proyecto TCP/PAR/153, "Apoyo a la formulación del Plan Agropecuario y Forestal".

FAO (1996) **PROYECTO TCP/FAO/PAR/4553. Asistencia técnica al IBR**, Documento Técnico Final, Asunción, FAO/IBR

FAO (1996 a.) **Legislación agraria y titulación de tierras**, Borrador Tercera Misión, Asunción, FAO/IBR, Programa de Cooperación Técnica: Apoyo a la Reestructuración del Instituto de Bienestar Rural.

Heikel, M.V. (1991) **Hacer el fuego. La mujer suburbana y las técnicas de cocción de alimentos**, Asunción, Base-IS/IDRC.

¹¹ Al respecto, la CODEHUPY denunció hace poco tiempo un verdadero terrorismo policial en asentamientos de S.José del Norte y Resquín. Casos similares se registraron en varios otros puntos del país.

Meliá, B. (1999) **Cómo imaginamos la economía paraguaya**. En, Revista Acción, No. 181, 10-13, marzo.

Palau, T. (1991) **Nuevos asentamientos rurales y crisis de la sociedad campesina en el Paraguay**. Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo No.32, julio.

Palau, T. y E. Teófilo (1992) **Qué ocurrirá con el campesinado**, Asunción, BASE-IS, Documento de Trabajo No. 36 enero.

DE LA PROTESTA SOCIAL AL MOVIMIENTO CAMPESINO

José Nicolás Morinigo

Dr. José Nicolás Morínigo, Master en Ciencias Políticas por la Universidad Rodrigo Fascio de Costa Rica, Abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Profesor en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica, de las siguientes cátedras: Metodología de la Investigación, Sociología de la comunicación de masas; Profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de las cátedras de: Teoría Social II, Teoría social III; Profesor en el Masterado en Educación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica de la cátedra de: Sociología de la educación

Director del Gabinete de Estudios de Opinión, GEO. Institución especializada en la área de estudios de opinión y Analista político del Diario Ultima Hora.

Publicaciones principales: Opiniones y actitudes políticas en el Paraguay - Universidad Católica. Asunción 1.986; Liderazgos Políticos y Coyuntura electoral - Universidad Católica .1.988; Pobreza y Vivienda - Comité de Iglesias. 1.991; Vocabulario Político - RP Ediciones. 1.996; Marzo de 1.999: huellas, olvidos y urgencias, 1.999.

De la protesta social al movimiento campesino

José Nicolás Morínigo

1. Introducción

En el marco de la llamada teoría de la modernización, la protesta social es una consecuencia del paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna como consecuencia de cambios en los patrones de conducta. En el marco de la teoría funcionalista, la acción se organiza en sistemas que regulan y condicionan la realización de acciones¹. Precisamente, el proceso de modernización implica cambios en las variables patrones que organizan las acciones. Desde esta perspectiva, un libro clásico de las ciencias sociales de los sesenta de un interesante y agudo observador, Gino Germani, integró los presupuestos teóricos del funcionalismo en el marco de condicionamientos históricos políticos, para presentar su libro "sociología de la modernización" en donde se plantea el cambio social como el paso de las sociedades tradicionales a las sociedades modernas.² El eje del análisis se funda en la orientación diferencial de la acción en referencia a las variables patrones en torno a los cuales se organiza la acción social según Parsons.

El punto clave que nos interesa consiste en definir las características del comportamiento colectivo campesino en un momento en el que se da un complejo proceso de transición de la protesta a la formación del movimiento social.

Si bien la perspectiva funcionalista constituye un enfoque útil para el análisis del comportamiento colectivo la misma debe complementarse con hipótesis provenientes de otras fuentes teóricas que completan una visión mas rica y al mismo tiempo mas compleja del proceso. No se trata desde luego de pretender realizar una suerte de mezcla incompatible entre visiones teóricas con presupuestos diferentes, se trata de insertar hipótesis de alcance medio, más específicas que los presupuestos teóricos de gran generalidad.

La llamada teoría de la modernización plantea que el proceso de cambio de una sociedad tradicional a una moderna provoca en sus inicios desorganización y dislocación. Se entiende por desorganización las consecuencias de los cambios continuos " que generan problemas sociales, rupturas y conflictos entre los diversos grupos, movimientos de protesta y resistencia al cambio"³ (Eisenstadt) y por dislocación la pérdida de la antigua inserción del grupo en la estratificación social lo implica reubicación distinta en la construcción de la " nueva" sociedad.

La debilidad de la teoría de la modernización radica en que centra su análisis en el complejo normativo orientador de la acción marginando del análisis las condiciones socioeconómicas y

¹ Al respecto véase un texto clásico de Parsons y otros: " Hacia una teoría general de la acción " Editorial Kapelusz. Buenos Aires. 1.968 y " El sistema social".Editorial del mismo autor.

² Germani, Gino: Política y sociedad en una época de transición. Edit. Paidós. Buenos Aires. 1.971. y del mismo autor: Sociología de la modernización. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1.972

³ S.N. Eisenstadt: La desorganización social, la transformación y la protesta en la modernización. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. 1.976

las relaciones de poder históricamente constituidas. Por otra parte, en sus versiones más radicales, la teoría de la modernización implica una visión fundada en modelos de comportamientos que no consideran las situaciones históricas. Así los cambios registrados en el proceso de modernización en Europa se hallan vinculados a situaciones históricas concretas que constituyen un marco general irreplicable, que para la teoría de la modernización pasa desapercibida.

Por otra parte, en la explicación del nuevo movimiento societal campesino, desde una perspectiva conservadora se lo percibe a partir de rasgos estereotipados que definen a un actor en un permanente estado de minoridad. Este punto es clave para interpretar una forma de creencia que es discriminatoria y al mismo tiempo justificadora de relaciones de dominación fundada en criterios autoritarios.

Por consiguiente este breve ensayo plantea una rápida descripción de lo que denominamos visión conservadora del campesinado, para luego desarrollar la siguiente hipótesis clave: Existe un proceso de profundización de la identidad campesina que supera el marco de la protesta social y repercute en la generación de un nuevo movimiento societal.

El campesinado en el pensamiento conservador

En el pensamiento conservador que predomina en la sociedad paraguaya, al campesinado se define por sus carencias. El campesino es el que no tiene educación, no tiene herramientas, no tiene ropas, no tiene zapatos. De esta visión se pasa a otra, siguiendo la misma lógica. Como el campesino carece de bienes materiales, se lo caracteriza también como un grupo en permanente estado de minoridad. Por eso el campesino en esta peculiar concepción conservadora no sabe pensar, no sabe " hacer política", no puede defender por si mismo sus intereses.

A partir del punto de vista señalado, las movilizaciones campesinas no pueden ser explicadas en función a factores internos, sino en relación factores externos que actúan sobre la masa campesina. Así, cualquier acto de protesta campesina exige necesariamente para dilucidar su alcance y significación conocer quien o quienes están detrás incitando tal tipo de comportamiento. Es común, no solo en los medios policiales, sino también políticos, la insistencia en la tesis de la manipulación campesina, de los sigilosos ideólogos ocultos que convierten a los " pobres" campesinos en títeres de sus intereses mezquinos.

Otra versión de la visión conservadora sobre el campesinado es menos radical ya que admite la posibilidad de la justicia de las demandas campesinas, pero siempre en actividades referidas a la vida campesina, que para ellos se circunscribe a la producción, a la familia y a la iglesia. En síntesis, para el pensamiento conservador el campesino nunca podrá alcanzar a ser parte de la ciudadanía, en el sentido de un sujeto partícipe y protagonista en la construcción política de su sociedad.⁴

⁴ Uno de los argumentos permanentemente utilizado por los conservadores para debilitar la participación de los campesinos en el proceso de protesta contra la privatización de entes públicos, era que los campesinos como no tienen, ni usan teléfono no pueden opinar sobre los avatares de la empresa pública de telecomunicaciones. Mas allá de la opinión sobre la conveniencia o no de la privatización, el hecho de negar la posibilidad de expresar

En la concepción conservadora la demanda campesina en sí misma constituye un acto ilegal que puede con facilidad convertirse en insurrección anárquica. Esta tesis hace que toda demanda campesina sea considerada como parte de un proceso autodestructivo de la sociedad, una suerte de protesta inútil, un juego perverso sin horizonte.

Otra forma de percepción conservadora del movimiento campesino proviene de la tesis de la modernidad, en el sentido que los campesinos poseen una representación "anticuada" de la sociedad y no son capaces de comprender la modernidad. En esta perspectiva, la ciudad representa lo moderno, el cambio, el dinamismo y el campo representa la continuidad, la tradición y la quietud.

La última visión se ha transformado en una ideología en el sentido de conformar una creencia capaz de justificar posiciones y visiones de la realidad. En tal visión, el campesinado aparece como incapaz de vivir en un mundo moderno. En este sentido la vida en comunidad, entendiendo el concepto de comunidad en una nueva perspectiva, diferente a la tradicional concepción de Tonnies, y Weber, después utilizada y divulgada por la sociología de manual. En esta nueva concepción la comunidad surge a partir "de las sociedades en red, de las sociedades globales,"⁵ que nacen de identidades no en el sentido de la tradición sociológica sino en el marco de una concepción que parte de la conciencia campesina sobre misma realidad.

Sin duda la economía tradicional campesina es muy frágil frente al desarrollo de la una economía de mercado en expansión, en el marco de una concepción cultural tradicional carecen de posibilidades para enfrentar con éxito las nuevas reglas impuestas por el mercado. Pero, lo que debe ser objeto de un análisis profundo es que el campesinado sobre todo los campesinos sin tierra y los campesinos asentados en colonizaciones ganadas mediante la ocupación están desarrollando una nueva identidad, que no se funda solamente en las tradiciones culturales sino también, como respuesta a la explotación económica y a la dominación política tradicional.

Esta nueva situación de resistencia y respuesta creativa al sistema económico, controlado por grupos de carne y hueso, que pretenden excluirlas es un fenómeno social de primera importancia para los procesos de cambio en el Paraguay a comienzos del siglo XXI.

Precisamente la nueva concepción descoloca a quienes tienen una concepción tradicional conservadora sobre el campesinado y las reacciones son muchas veces hasta violentamente opuestas. La nueva realidad y la capacidad de "contestar" que tiene el campesinado solo puede ser entendido, en la concepción conservadora, como un acto de rebeldía y subversión producido desde afuera del movimiento, es decir, un acto de manipulación.

ideas con respecto a un servicio público, a una empresa pública, y a un tema central en ese momento en el debate, era simplemente el reconocimiento de una concepción por el cual se considera a los campesinos como ciudadanos de segunda clase. Ellos no pueden opinar sobre un tema que interesa solo a los ciudadanos de primera clase.

⁵ Martin de Carvalho: comunidad de resistencia y superación. Curitiba. Febrero del 2.002 (fotocopia)

La nueva " realidad" del movimiento campesino

El marco económico social de la sociedad paraguaya en lo referente a la cuestión rural se caracteriza desde la década del 70 por un proceso de transformación de la estructura agraria fundado en un desarrollo desigual y combinado. Por una parte se observa un impulso fuerte de producción empresarial a gran escala, sobre todo de la producción de soja,⁶ pero por otra parte un rápido proceso de descomposición y empobrecimiento campesino sobre todo en el nivel económico, con una fuerte repercusión en un proceso en donde se diluyen las relaciones sociales de carácter tradicional.

Uno de esos procesos negativos sobre el campesinado lo denominamos proceso de gasgajamiento de la familia, que se produce con el abandono de los hijos, y sobre todo de las hijas de familias campesinas que vienen al medio urbano y que se separan de ellas. Poco a poco van perdiendo vinculación con el núcleo familiar produciendo una gran congoja permanente entre los miembros del grupo.

Por otra parte se observa un dinámico proceso de concentración de la tierra y de la tecnología productiva. La concentración de la tierra se está realizando en la región oriental en base a la compra de tierras a los campesinos menifundistas, en algunos casos como en Yhú, en el Departamento de Caaguazú la compra de tierras por parte de colonos brasileños se realiza previa presión que va desde la utilización indiscriminada de productos fitosanitarios que afectan a la salud de la población que al final venden sus tierras a un precio irrisorio para pasar a convertirse en campesinos sin tierra o simplemente marginales de los cinturones urbanos.

El proceso de desarticulación campesina desembocó finalmente en un proceso de crisis rural, en la que sin duda también jugó un papel clave agravante la caída de la producción del algodón, que si bien por si solo no explica la crisis rural, incide en ella de manera influyente.

El marco cultural sin embargo aun cuando sigue el campesinado enraizado en la cultura tradicional, está demostrando que a partir de una nueva conciencia de la realidad económica busca desarrollar en un primer momento un movimiento de resistencia que empieza a dar de creatividad apuntando pasar de la posibilidad de construir un proyecto alternativo de sociedad, en donde el campesinado pueda seguir aportando al desarrollo de la sociedad paraguaya.

Cuatro hipótesis para explicar la movilización campesina

1.Primer hip tesis: La movilizaci n campesina responde a un proceso c clico de articulaci n, desarticulaci n y rearticulaci n, (Daniel Campos) pero que va profundizandose en la conformaci n de un movimiento con capacidad de hacer historia.

⁶ Se calcula que la producci n de soja del a o agr cola 2.002- 2.203 tendr  una superficie de 1.070.000 hect reas y una producci n que sobrepasar  las tres millones de toneladas. Estas cifras ubican al Paraguay en un quinto lugar en la producci n de soja en el mundo.

Desde las ventas de tierras públicas en 1.887 y luego del fracaso de la ley de la pequeña propiedad, (ley de homestead de 1.910)⁷ una de las formas tradicionales de adquisición de tierras por parte del campesinado fue la ocupación.⁸ Las ocupaciones siempre generaron procesos de movilización parcial, pero nunca conformaron una movilización a escala nacional. Quizás, el movimiento con mayor cobertura nacional haya sido la Liga Agraria Cristiana, que tuvo momentos de lucha importante que al final fue en apariencia desmovilizada por medio de una salvaje represión en abril de 1.976, en la llamada Pascua Dolorosa.

Con posterioridad la movilización campesina, mas allá de los procesos de ocupación focalizada, que siempre fueron parte de la lucha, reiniciaron nuevamente las movilizaciones de escala nacional con la gran marcha de 1.991 que se inició en San Juan (Misiones) hasta Asunción.

A partir de 1.994 las organizaciones campesinas marchan sobre Asunción todos los años en el mes de marzo integrando esa movilización a la coyuntura política, lo que incide de acuerdo a las circunstancias.

El Movimiento campesino tiene un carácter cíclico, antes debilitado por la represión volvía a tomar auge con posterioridad. Después del golpe la participación del liderazgo campesino a la acción política se constituyó en un factor que influyó debilitando la formación de un movimiento con autonomía, pero sin embargo, tanto la represión como la participación política crearon las condiciones para una mayor identidad en el movimiento campesino, lo que favorece el desarrollo y la creación de un movimiento con capacidad de presencia y acción histórica, desde su posicionamiento socioeconómico y cultural.

2.Segunda hipótesis: La demanda campesina se expresa en cuestiones puntuales pero lo que existe realmente es la búsqueda de un nuevo posicionamiento.

La búsqueda de lo que Francisco Alberoni llama El status naciente al que define como "una situación de transición de aquel actor que a través de una acción colectiva crea una solidaridad alternativa y una exploración de las fronteras de lo posible, dado cierto sistema social con el fin de maximizar lo que es realizable en un momento histórico".⁹

Para Alberoni el estado naciente, en el sentido sociológico de status naciente, es decir de un nuevo posicionamiento dentro de la estructura social de un actor colectivo, " evoluciona a través de cuatro fases: Las precondiciones estructurales, los sujetos, la experiencia fundamental y la dinámica psicológica".¹⁰

⁷ Al respecto puede verse el libro mas completo y útil sobre la problemática de la tierra en el Paraguay de Carlos Partore: La lucha por la tierra en el Paraguay. Editorial Antequera. Montevideo 1.972

⁸ Galeano Luís: Dos alternativas históricas del campesinado paraguayo. En Revista Paraguaya de Sociología N 41 Asunción 1.978

⁹ Alberoni, Francisco: Estado naciente. Estudios sobre los procesos colectivos. Bolonia. Il Mulino 1.968

¹⁰ Citado por Norberto Bobbio, en Diccionario de Política. El ensayo sobre los Movimientos sociales corresponde a Gianfranco Pasquino. Edit. Siglo XXI, pag. 1.014 , segundo tomo.

La hipótesis es que el campesinado lo que está buscando es una nueva inserción social, mas ventajosa desde el punto de vista de los beneficios recibidos desde la sociedad como un actor colectivo específico.

Para explicar esta nueva situación recurrimos a la definición de Lewis Coser, para quien el sistema social " implica una distribución de poder, así como de riqueza y posiciones de satatus entre los actores individuales y los subgrupos componentes".¹¹

Lo que está ocurriendo es que el campesinado organizado esta " descubriendo" que su posición dentro de la estructura social es absolutamente desventajosa, en consecuencia constituyen el sector social que menos recibe en el proceso de distribución del poder, la riqueza y prestigio social.

El cuestionamiento a la posición que ocupan dentro del sistema, no se traduce directamente en una demanda, esta se hallaba disfrazada en un primer momento por cuestiones más operativas como el precio del algodón, o la necesidad de un sistema crediticio mas justo, pero en las demandas posteriores la visión de constituir un actor social capaz de plantear reivindicaciones en torno a su papel dentro de la estructura social le está dando un rostro nuevo al movimiento campesino, que está descolocando a quienes asumen el pensamiento conservador. Es decir, el campesinado protesta por la cuota que le corresponde en la repartija de la riqueza, el prestigio y el poder.

3. Tercera hipótesis: existe un proceso de profundización de la conciencia campesina.

Utilizando la conocida clasificación de Freire, podemos decir que el campesinado organizado está pasando de una conciencia "intransitiva" que es fruto de la " limitación de la esfera de comprensión que impide responder a los desafíos que vengan desde afuera de la órbita vegetativa".¹² La intransitividad no es una situación natural sino producto de las condiciones impuestas desde afuera. La transitividad es el paso de un tipo de conciencia ingenua a un estadio que no necesariamente alcanza a la conciencia crítica. Puede incluso detenerse en una explicación mágica de la realidad que lleva a la preponderancia de la irracionalidad. (fanatismo).

Pero lo que está ocurriendo al movimiento campesino organizado en el plano del desarrollo de la conciencia en cuanto actor colectivo, es el paso hacia el desarrollo de la conciencia crítica. En este sentido rescatamos la subjetividad de los actores, pero al mismo tiempo la inserción en un sistema social que define un tipo de comportamiento que tiene una realidad objetiva.

La conciencia crítica busca una explicación de la situación como producto de la actividad humana, en consecuencia la pobreza social, la explotación, no son productos de fuerzas extrañas sino situaciones que son consecuencia de la misma actividad humana, que establece un sistema económico y normativo en el que los sujetos y colectividades cumplen un papel específico.

¹¹ Coser, Lewis: Nuevos aportes a la teoría del conflicto social. Editorial Amorrortu. Buenos Aires. 1.964 Pag. 35.

¹² Freire Paulo: La educación como práctica de la libertad. Editorial Siglo XXI. Mexico 1.997. 45 a. Edición, página 53.

La conciencia crítica es el descubrimiento de la capacidad humana de hacer historia, no en la soledad de cada individuo sino en solidaridad con otros, en comunicación, en diálogo con otros. Esta es la situación actual por la que está atravesando el movimiento campesino en el Paraguay.

La conciencia crítica impulsa a la movilización, a la praxis, que reflexión y acción para comprender y "hacer" la realidad social.

4. Cuarta hipótesis. De la protesta social se esta pasando al movimiento campesino.

Desde marzo de 1994¹³ para fijar una fecha, los campesinos han empezado a demostrar capacidad de organización, disciplina y conciencia. Estos tres factores les ha permitido crecer en autoestima, en credibilidad en sus liderazgos y en la capacidad de movilización

Les permitió crecer en autoestima, en credibilidad de liderazgos, en capacidad de movilización. Siguiendo a Touraine,¹⁴ es posible observar que el movimiento campesino organizado tiene hoy un fuerte sentido de identidad social (campesino haicha), un sentido de oposición, hacia sobre todo los sectores terratenientes y hacia quienes controlan el aparato estatal. Desde este punto de vista es absolutamente comprensible y lo contrario sería inexplicable, la asunción de una posición política en sus demandas sociales, que para los sectores conservadores constituye una suerte de peligroso protagonismo de quienes siempre han sido considerados como sombras que solo pueden reflejar los intereses de otros sectores sociales.

Al mismo tiempo, el movimiento campesino está desarrollando una visión histórica de la situación campesino intentando desarrollar un proyecto histórico que empieza a vislumbrarse con las limitaciones propias de un movimiento en desarrollo.

El desarrollo del movimiento campesino dependerá de cuatro factores claves: de la capacidad de plantear objetivos viables, a la capacidad de articular alianzas, a la capacidad de generar liderazgos democráticos y a la habilidad para relacionar lo político electoral con lo político social.

¹³ Sobre las movilizaciones campesinas puede verse el artículo de Quintín Riquelme y Mirtha Rodríguez: Las luchas campesinas. En acción número 225. Julio de 2002.

¹⁴ Para Touaine los tres principios claves que definen a un movimiento social son, el principio de identidad, el principio de oposición y el principio de totalidad. Al respecto véase Sociología de la acción. Ediciones Ariel Barcelona. 1.969 . pag. 181.

MOVIMIENTO CAMPESINO HOY. CONQUISTAS Y DERROTAS EN UN CONTEXTO CONTRADICTORIO DE CRISIS SOCIAL Y POLÍTICA

Luís Galeano

Luís A. Galeano, Doctor de Derecho por la Universidad Central de Madrid (España); Master en Ciencias Políticas por la Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Ex Decano de la facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica (sede Asunción).

Director del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES).

Profesor de la facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Católica y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

Ha investigado y publicado artículos (en revistas nacionales y extranjeras) y libros sobre: la cuestión agraria, el movimiento campesino, los movimientos populares urbanos, la pobreza, la exclusión social, la educación y desarrollo, y la crisis del estado autoritario.

Movimiento Campesino hoy. Conquistas y derrotas en un contexto contradictorio de crisis social y política.

Luís A. Galeano

Uno de los actores sociales más destacados, en este largo y azaroso proceso de democratización, es el movimiento campesino. Más allá de sus limitaciones y contradicciones, de sus aciertos y desaciertos, las distintas organizaciones campesinas, especialmente las que han intervenido a través de proyectos y luchas de índole reivindicativos, se han constituido en actores sociales que ocuparon legítimos espacios en el escenario social y político nacional. En otro trabajo, hemos señalado que “las marchas, las movilizaciones y las múltiples protestas del campesinado organizado hicieron que los problemas del sector fuesen difundidos y debatidos más ampliamente en el ámbito de la opinión pública. A partir de estas acciones colectivas se logró que dichos problemas hayan sido concebidos como cuestiones sociales que no sólo afectaban críticamente a los pequeños agricultores y a los campesinos sin tierra, sino que también impactaban sobre el conjunto de la sociedad y la marcha del propio proceso de democratización”. Es decir, los campesinos organizados se convirtieron en actores ciudadanos, ganando un protagonismo que antes no tenían.

Esa mayor legitimidad ciudadana y ese más notorio protagonismo no siempre se tradujo en la oportuna y adecuada atención de los problemas campesinos. En efecto, si bien las organizaciones campesinas obtuvieron la atención de una parte de sus demandas y reivindicaciones, la otra parte no fue atendida en la práctica, y si lo fue la respuesta ha sido meramente retórica o la atención fue parcial o visiblemente ineficaz, y en no pocos casos contraproducente. Ahora bien, los éxitos y los fracasos no sólo tuvieron lugar en el plano de las luchas y las demandas encaradas frente a los actores sociales y políticos dominantes, sino que también al interior del conjunto del movimiento campesino se verificaron avances y retrocesos en el marco de la alianza existente entre las distintas organizaciones que lo integran. En estas notas, nuestro análisis enfatizará las conquistas y las derrotas más recientes del movimiento campesino como actor social colectivo, reflexionando sobre los saldos positivos y los negativos acaecidos tanto en el contexto de las acciones y disputas entabladas ante los actores detentadores del poder imperante en la sociedad y en el Estado, como los que igualmente surgieron en su propio seno, expresados en los encuentros o desencuentros surgidos entre las organizaciones que lo conforman.

El escenario reciente y actual

En los últimos años, la crisis de la economía campesina no sólo ha persistido, sino que inclusive empeoró aún más. La fuerte retracción que desde años atrás venía experimentando el cultivo del algodón (el principal rubro de renta de la gran mayoría de los productores campesinos), durante el 2002, se agravó aún más, pues el área sembrada disminuyó en más de 150 mil hectáreas (en comparación al volumen registrado el año anterior) y la productividad y los ingresos disminuyeron notoriamente, por causa de la sequía y depresión de los precios

internacionales. No sólo los mayoritarios estratos campesinos que, desde la década del 60, dependían del mencionado renglón productivo para la obtención de gran parte de sus ingresos monetarios están atravesando por una situación económica sumamente crítica, sino también los segmentos que, en el transcurso de un período más reciente -años 90-, innovaron sus estrategias productivas, y que recurriendo a una inserción más intensa y eficiente al mercado (horticultores, fruticultores y pequeños granjeros), entraron en una fase de estancamiento e inclusive de declive. Las importaciones de productos a más bajos precios y de mejor calidad provenientes de los países vecinos, así como la inexistencia de políticas públicas diferenciadas de financiamiento y de mejoramiento tecnológico incidieron en la mencionada retracción.

La clase social más golpeada por el colapso en el que se encuentran las políticas sociales en este tramo final del inoperante Gobierno del Presidente González Macchi es la campesina. El prácticamente paralizante déficit fiscal hace que sean las comunidades rurales las más negativamente afectadas por la restricción de los recursos estatales en el ámbito de la provisión de los servicios sociales clave, en especial los referidos a la educación y a la salud. Los grupos campesinos que todavía disponen de ciertos recursos productivos (tierra e instrumentos de labranza) intentan reconstruir sus capacidades de auto-alimentación, a costa de una más intensiva auto-explotación de la fuerza de trabajo femenina, y esperan que los jóvenes que migran a las ciudades del país, a la Argentina o al Brasil, les hagan llegar remesas de dinero, menos abundantes que las de otras épocas, pero siempre de vital importancia. Los estratos con menores recursos y los campesinos sin tierra son los más vulnerables. Las cada vez menores oportunidades laborales existentes en los mercados de trabajo urbano, debido al ya prolongado estancamiento de la economía nacional, les dejan horizontes muy estrechos de supervivencia. Si no se sumergen en las condiciones más duras de la pobreza extrema es porque, en varias de las comunidades rurales, todavía persisten importantes recursos y energías de capitales sociales y comunitarios (redes de cooperación y solidaridad).

La crisis política se agudizó últimamente. Si bien el juicio político, que culminó el pasado 11 de febrero de 2003, no desembocó en la destitución del Presidente de la República, el mismo dejó señales evidentes que: la gestión de González Macchi va a quedar como una de las más pobres e ineficientes de la historia política contemporánea paraguaya; su no desplazamiento de la primera magistratura se debió al juego de intereses imperantes en las puertas de una nueva elección presidencial (a realizarse en el próximo mes de abril); y los cargos de corrupción que le fueron imputados no han sido levantados y que deben ser dilucidados en los estrados judiciales. El fuerte enrarecimiento del clima político, aunque, por un lado, generó más confusión e incertidumbre, también, por otro lado, abrió espacios para que diversos segmentos de la ciudadanía expresaran sus posiciones y llegaran a movilizarse en contra la corrupción y la impunidad. Precisamente, las más importantes organizaciones del movimiento campesino, de forma coordinada entre ellas o en alianza con otras organizaciones de los grupos progresistas y de otros sectores sociales, protagonizaron acciones de protestas y de demandas específicas para resolución de los problemas causados por la inoperancia del Gobierno y la corrupción pública.

Las conquistas

En el transcurso del año 2002, además de los clásicos reclamos por la reforma agraria, los precios de los productos del sector, la salud y la educación, las organizaciones campesinas también se movilizaron, ocupando rutas y marchando hasta Asunción, para detener la privatización de las empresas estatales (particularmente la telefónica), defender la banca pública, repudiar el terrorismo del Estado, protestar por la postergación del gasto social en el presupuesto de la Nación, repudiar el terrorismo de Estado y manifestarse en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

La reforma de la banca pública fue postergada. Se suspendió la venta de COPACO (telefónica estatal) y la Ley 1.615 de privatización de las empresas estatales fue derogada. En el primer reclamo, las organizaciones campesinas actuaron conjuntamente con la Coordinadora Agrícola del Paraguay (que aglutina a los medianos y grandes empresarios agrícolas), los sindicatos estatales de ministerios e instituciones bancarias y financieras afectados y una de las centrales sindicales más importantes del país, la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Para el segundo reclamo, las mencionadas organizaciones se unieron a la mayoría de las organizaciones sindicales nacionales, los grupos políticos de izquierda y algunos grupos políticos antiprivatistas pertenecientes a partidos tradicionales (al Liberal concretamente), para constituir lo que se denominó el Congreso Democrático del Pueblo.

Uno de los saldos positivos de las distintas intervenciones, en el contexto de sus tradicionales y emergentes demandas, fue “el restablecimiento de las alianzas entre las grandes federaciones que se habían separado en el año 1998, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Organización Nacional Campesina (ONAC) y la Meza Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC)”. La separación se había concretado, por un lado, como consecuencia de la divergencia de intereses que afloraba entre los distintos estratos de pequeños agricultores, generada por la agudización del proceso de diferenciación campesina provocado por el avance disruptivo del capitalismo agrario. El desencuentro, por otro lado, en mayor medida surgió por las discrepancias ideológicas y de orientaciones valorativas que empezaron a manifestarse entre las mencionadas organizaciones, sostenidas preferentemente por las dirigencias y líderes. Mientras que la ONAC continuaba más apegada al mecanicismo cristiano cultivado por las Ligas Agrarias de los años sesenta y setenta, y la MCNOC no lograba todavía perfilar un corpus coherente de principios, la FNC ya había asumido ejes ideológicos de corte netamente clasista.

Lo que entonces los había distanciado, ahora, más recientemente, los volvía a unir: los principios y la ideología. Entre los primeros, sobresalió el criterio ético del rechazo de la corrupción. Una parte importante de los argumentos de rechazo de la privatización de las empresas estatales se refirió a la corrupción en la que se estaba llevando a cabo el proceso. En cuanto a la ideología, el eje aglutinante giró en torno al resurgimiento del sentimiento nacionalista, que inspiraba la resistencia a la apertura irrestricta del libre mercado, impuesta por los centros hegemónicos del capitalismo mundial, y la oposición a las recetas de reforma económica impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

Dada la laxitud de los principios y de las ideas inspiradores, se explica que los consensos no sólo tuvieron lugar al interior del movimiento campesino, sino que asimismo abarcaron a una gama más amplia de actores sociales y políticos. En el caso de la reforma de la banca pública, además de un relativo acuerdo sobre la oposición a la política privatista, la coincidencia también se dio en el plano de los intereses. Con los empresarios agrícolas el “consenso amplio” estuvo en la necesidad de mantener el financiamiento público, a pesar de que los intereses de fondo no eran idénticos, pues para éstos dicha fuente constituía el acceso a créditos a intereses más bajos y ventajosos que los ofrecidos por la banca privada, mientras que para los campesinos esta última era prácticamente la única opción de contar con créditos, fuera de las garras de la usurería. Y los sindicatos de las entidades financieras del Estado, por su parte, se sumaron a la antiprivatización en defensa de la seguridad del empleo del que disfrutaban.

En suma, tanto la alianza interna del movimiento campesino como la que se estableció con los otros actores sociales y políticos se concretaron en el suelo movedizo de una coyuntura socio-política sumamente incierta y contradictoria. En gran medida, cabe reiterarlo, la inoperancia y la debilidad del actual Gobierno crearon las circunstancias propicias para el surgimiento del mencionado frente social, independientemente de las coincidencias ideológicas mínimas y de los intereses más “envolventes” que si dieron entre los distintos sectores y organizaciones lo integraron. El hecho de que el denominado Congreso Democrático del Pueblo se haya, de hecho, esfumado una vez que se derogó la ley de privatizaciones y no se aprobó la ley de transición económica, que era una de las condiciones que había impuesto el FMI para arribar a un acuerdo con el Gobierno, pone en evidencia que la alianza popular de base amplia no pudo trascender a la coyuntura que la vio nacer. La alianza entre las organizaciones campesinas tampoco se está manteniendo en los momentos más actuales. Sobre el alcance de la misma, empero, volveremos al final de estas notas.

Las derrotas

En el ámbito de las demandas típicas campesinas el saldo ha sido más bien negativo. Durante 2002, la lucha por la tierra sostenida por las organizaciones desde hace varias décadas atrás, aunque menos intensa y masiva, no dejó de ser importante. En total, se verificaron 28 conflictos de tierra, de los cuales 16 fueron resultados de nuevas ocupaciones. Estas últimas, a igual que los casos verificados en años anteriores, fueron llevadas a cabo por parte de las organizaciones de campesinos sin tierra como medidas extremas, dada la no existencia de una política explícita de tierra por parte del Estado, unas agotadas gestiones y requerimientos ante las entidades públicas correspondientes.

La diferencia, en comparación a épocas precedentes, consistió en la materialización de una proporción mayor de desalojos practicados por parte de las autoridades judiciales y policiales. En efecto, en el año pasado, fueron realizados un total de 14 desalojos. En todos ellos se produjeron acciones represivas, apresamientos, torturas y dos campesinos fueron muertos. El principal resultado de la lucha es que la demanda de tierra de los campesinos organizados ha sido prácticamente desatendida. Esta desatención es el resultado no sólo de la mencionada inexistencia de una política de tierra, sino también del endurecimiento de la posición de los

grupos terratenientes dominantes, que están imponiendo sus intereses en la aplicación de la ley y de la administración de la justicia, sumamente expuesta, más que a la presión política e ideológica, a los “estímulos” de la corrupción.

Si la reforma de la tenencia de la tierra ha sido nula, el panorama no estuvo mejor en las otras demandas campesinas clásicas: crédito, comercialización de productos del sector, asistencia técnica y apoyo a las organizaciones productivas. Al colapso financiero del Estado ya citado, se le debe agregar la ineficiencia de los organismos públicos en la ejecución de algunos programas, como el destinado a promover el fortalecimiento de las estrategias productivas de grupos de campesinos organizados, y que contó con fondos de apoyo—como subsidio e inversión— no escasos, proveídos por Taiwan. La participación de dos de las federaciones campesinas (MCNOC y ONAC) en la administración de los recursos no evitó el fracaso.

Recapitulación final

Ni las conquistas fueron plenas victorias, ni las derrotas fueron totales fracasos. Centrándonos en la cuestión que más directamente atañe a las demandas campesinas, cabe señalar que la postergación del tratamiento de la reforma de la banca pública, en la práctica, significó transferir al futuro la solución de un problema institucional y político clave para la puesta en marcha de una política de desarrollo rural que tienda a fortalecer a la agricultura familiar. Actores sociales y políticos clave (incluidos los empresarios agrícolas como vimos) están de acuerdo en que se mantenga una banca pública encargada de administrar el crédito dirigido a la agricultura familiar. Donde el consenso termina es en la forma en que se concretaría la reconversión institucional, teniendo en cuenta que la misma debería implicar la reducción de la excesiva cantidad del personal burocrático y técnico con el que cuenta las dos instituciones más importantes del sector: el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y el Banco Nacional de Fomento (BNF).

El estancamiento en el acceso efectivo a la tierra registrado por parte del campesinado organizado no debe ser visto desde el signo exclusivo del fracaso. La movilización de las organizaciones campesinas por esta siempre vital demanda es una llamada permanente para el diseño y la puesta en ejecución de una política de reforma agraria. A diferencia de lo que sostienen los grupos de poder, esta reforma es una de las grandes deudas sociales y políticas que debe ser saldada por los responsables de la conducción del país.

La alianza interna de las organizaciones constitutivas del movimiento campesino, en el 2002, resurgió, pero también volvió a dar señales de debilitamiento. Prueba de esto último es que algunos de los más destacados dirigentes de las tres grandes centrales se están candidatando para algunos cargos electivos que serán designados en las elecciones generales que realizarán en abril de 2003. Cada uno de ellos se está postulando a través de los partidos y movimientos políticos más afines a la ideología de sus organizaciones. La mayoría estas entidades políticas responde a posiciones progresistas y de izquierda. No es casual que uno de los principales dirigentes de la ONAC, de raigambre social cristiana, figure en los primeros lugares de la lista a senadores del nuevo movimiento Patria Querida, que responde a una vertiente ideológica neoconservadora modernizante. Esperemos que este actual desencuentro sea más bien

momentáneo y que prontamente vuelvan a concretarse próximamente otros nuevos encuentros, como el que tuvo lugar durante el año que acaba de concluir. Una parte importante de la responsabilidad está en manos de los dirigentes campesinos. Ultimamente, en gran medida, son ellos los gestores de las uniones o desuniones en pos de las grandes causas campesinas: la superación de la pobreza y de la exclusión social, y la conquista de ciudadanía autónoma y gravitante.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Galeano, L. A., **“La sociedad dislocada”**, CPES, Asunción, 2002.
2. CDE, **“Informativo Campesino”**, No. 171, Asunción, Diciembre 2002.
3. CDE, **Ob. Cit.**
4. CDE, **Ob. Cit.**

MOVIMIENTO GREMIAL CAMPEÑO Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA REVOLUCIONARIA: APUNTES DE UNA ATRIBULADA RELACIÓN

José Parra y Camilo Soares

José Parra tiene 52 años y está casado. Es Licenciado en Enfermería, docente y destacado dirigente campesino. Activó en las Ligas Agrarias Campesinas, a partir de 1971. El 3 de mayo de 1976 fue detenido y salvajemente torturado por la Dictadura Stronista hasta el mes de diciembre del año siguiente. Participó en la formación de la Federación Nacional Campesina y la MCNOC (actualmente es miembro de la Dirección Nacional de esta organización). Es destacado dirigente de la Corriente Gremial Campesina. Ha sido fundador y dirigente de la ACADEI. Es Director del Centro Educativo Integral "Ko'e Pyahu" de Unión, San Pedro.

Camilo Soares, egresado de la carrera de Sociología de la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción".

Activo dirigente estudiantil en el gremio de secundaria llegando a ocupar la Secretaría General del Frente Estudiantil Secundario FES (1992-1993) organización que encabezó las luchas por el boleto Estudiantil.

Desde los años 1996 hasta mayo del 2001 se desempeñó como coordinador general de la Fundación "Casa de la Juventud".

Actualmente se desempeña como responsable del Programa de Formación de "Monitores de Educación Popular" del Centro de Estudios y Educación Popular "Germinal".

Movimiento Gremial Campesino y Organización Política Revolucionaria: Apuntes de una atribulada relación

José Parra y Camilo Soares

Un proceso accidentado en la conformación y desarrollo de la relación entre el llamado movimiento gremial campesino y el movimiento político partidario de signo revolucionario ha caracterizado a estos años de la llamada “transición democrática paraguaya”¹.

La innegable aparición masiva en escena de la protesta social campesina llevada de la mano por antiguas organizaciones sociales o nuevas agrupaciones ya no de manera esporádica o reducida a una ocupación de tierras o a la petición de precios ventajosos para ciertos productos, muestra que desde diferentes segmentos de la población rural se exponen las más variadas lógicas de luchas por la sobrevivencia en el contexto de una sociedad en profunda crisis.

En el marco de esta situación la participación de organizaciones políticas partidarias de izquierda ha sido sumamente irregular, pasando por el papel de simples espectadores alejados del escenario de luchas o presentes de manera solidaria testimonial, pero también se ha participado como propiciador de la conformación misma de las organizaciones campesinas hasta inclusive jugando el papel de articulador y movilizador de importantes episodios de protesta social, tómesese como simple ejemplo el papel de diferentes organizaciones político-partidarias de izquierda en el llamado “Congreso Democrático del Pueblo”².

Así, este fenómeno nos plantea diferentes interrogantes en torno a los objetivos y alcance de las diferentes reivindicaciones, respecto al aporte real de las organizaciones gremiales

¹ Algunos autores han llamado al proceso que se desarrolló post caída de la dictadura de Stroessner con el nombre de la “*Transición inconclusa o inacabada*”, conceptualización con la que debo expresar mi discordancia debido a que ésta ve a nuestra llamada “transición” desde una perspectiva del “**Deber Ser teórico**”, o sea, parte de la ilusión de que nuestra formación social podría evolucionar hacia un “estado social de derecho” que sea la expresión práctica de una serie de dogmas y doctrinas expresadas literariamente en Leyes, Constituciones, etc.. Esta visión ingenua no considera la configuración del Ser histórico de nuestra Formación Social a partir de sus propias contradicciones de clase y su inserción en el capitalismo mundial como lo determinante, mas bien apela a la necesidad de una supuesta “**falta de madurez de nuestra clase política**” y a la “**falta de voluntad**” para el cambio. Pero como este no es el objeto de la presente discusión, me limitaré a plantear que para los efectos de el presente artículo parto de la premisa que el estado actual de cosas refleja el estadio de desarrollo real que puede ser alcanzado bajo el presente régimen, no hay “transición inconclusa”, la situación actual es el producto histórico posible.

² “**Congreso Democrático del Pueblo**” fue el nombre que se dio a la alianza entre la “**Plenaria Popular contra el Terrorismo de Estado**” (conformada por agrupaciones políticas de izquierda como el Partido del la Convergencia Popular Socialista, el Partido comunista Paraguay y el Partido Patria Libre; además de organizaciones gremiales como SITRANDE, Sindicato de Trabajadores Sociales, personalidades del ámbito de la cultura y del arte) y del “**Frente en Defensa de los Bienes Públicos**”, conformado por el Movimiento Popular Revolucionario Paraguay Püajurá, el Partido Febrerista, el movimiento Cambio para la Liberación del PLRA, la Federación Nacional Campesina, la OTEP, entre otros. Dicha alianza se concretó en el mes de mayo del año 2.002 bajo el acuerdo de la lucha n contra del proceso de privatización del Telefónica COPACO, en contra de la Ley Antiterrorista, en contra del proyecto oficial de Reforma de la Banca Pública, entre otros punto.

campesinas en la construcción de un proyecto revolucionario y sobre el contenido y la forma que debe guardar la relación entre ambos actores, los sociales reivindicativos y los políticos partidarios, y estos en su ubicación respecto de la estructura socioclasista.

La heterogeneidad, el desarrollo desigual, la diversidad de los contenidos y las formas organizativas, nos colocaría ante la apariencia de una imposibilidad de establecer comparaciones. Pero, descubrir lo similar en lo diverso, en lo efímero e inmediato, puede contribuir a romper el localismo que domina a muchas organizaciones y limita su unidad y capacidad de transformación social.

Movimientos Gremiales Campesinos como parte de los Movimientos Sociales; algunos elementos para su interpretación.

*(...)Una cosa sin embargo es evidente. La naturaleza no produce por una parte poseedores de Dinero o de Mercancías y por otra personas que poseen simplemente sus propias fuerzas de trabajo. Esta relación en modo alguno pertenece al ámbito de la historia natural, ni tampoco es una **relación social** común a todos los períodos históricos. Es en sí misma, ostensiblemente, el resultado de un desarrollo histórico precedente, el producto de numerosos trastrocamientos económicos, de la decadencia experimentada por toda una serie de formaciones más antiguas de la producción³*

En su capítulo IV de El Capital, **Marx** desarrolla una discusión con la lógica subyacente a la Economía Política, que plantea ciertas relaciones sociales como áhistóricas, como existentes debido a la propia naturaleza humana, o como algo construido en un supuesto ámbito de libre arbitrio de las relaciones sociales.

Pero qué relación guarda ese planteamiento con el tema de los llamados movimientos campesinos? En ese sentido vale la pena plantear los siguientes elementos;

- *Todo Movimiento Social es un Movimiento Histórico*; en ese sentido debemos partir de la premisa que la historia no es tomada aquí en cuanto ciencia de estudio de un objeto teórico determinado, sino más bien como el devenir de la “vida misma”. Pero esta “vida misma” no se desarrolla en el vacío y dirigida por el libre arbitrio de la voluntad de sus actores. Si no más bien está condicionada por una cierta estructura social, con una cierta configuración de una correlación de clases (dominantes y dominadas, y no solamente el caricaturesco esquema de “Burgueses y Proletarios”), en donde la relación entre ellas varía tanto en los tiempos históricos, como en sus expresiones particulares (continente, país, región, etc.). Por ejemplo cuando nos referimos al caso nuestro (paraguay) debemos considerar que la emergencia, formas de lucha, reivindicaciones, etc., de los diferentes Movimientos Sociales está directamente configurada por un entramado de clases dadas y no en base a

³ Marx, Karl; El Capital; Editorial Siglo XXI, México DF, 1996, pag. 206.

abstracciones teóricas que no conciben con la expresión particular del movimiento histórico. En este sentido, la aparición y desarrollo del movimiento campesino es hijo de la estructura sociohistórica del país, esto es, de la estructura de propiedad de la tierra, del tipo de producción y su vinculación con el mercado capitalista mundial, etc.

➤ *Todo Movimiento es una Relación Social;* o sea, cuando nos referimos a “Movimiento” nos estamos refiriendo a cierto tipo de relación establecida entre los miembros de una comunidad históricamente determinada, una relación establecida no de común acuerdo en el sentido consciente racional del significado, sino más bien una relación que precede al individuo y en la que él se inserta como una forma de adaptación al medio empujado por la necesidad de sobrevivencia. Así constatamos que no toda relación social existió siempre, entonces no todo Movimiento Social Campesino existió siempre. En nuestro caso particular podemos afirmar que los diferentes movimientos sociales campesinos que existen hoy en día en nuestro país, tienen una conformación y un devenir histórico empujados por el lugar preciso que ocupan en la estructura social de clases, esto es, en el proceso de producción y reproducción de su vida.

➤ *Los Movimientos Sociales se expresan históricamente a través de cierto tipo de Organizaciones Sociales;* aquí debemos hacer una distinción entre “Movimientos y Organizaciones”; porque las “Organizaciones” forman parte del “movimiento”. En ese sentido puede parecer una simple exquisitez literaria el intentar establecer una diferenciación terminológica, pero para los efectos de una comprensión precisa del fenómeno en cuestión es de interés establecer dicha diferenciación⁴.

Por ejemplo, al referirnos del “Movimiento Campesino” nos estamos refiriendo a una cierta Relación Social Históricamente determinada por una cierta estructura clasista de la sociedad (*por ejemplo; por una lado una clase propietaria de grandes extensiones de tierra y eventualmente compradora de “mercancía-fuerza de trabajo” y por otro lado una clase vendedora de “mercancía-fuerza de trabajo” en forma de peones de estancia, muchos de los cuales pasan en algunas circunstancias a formar parte de los movimientos de los llamados “sin tierra”*), en donde dicho movimiento se expresa, en nuestro caso particular, es a través de organizaciones campesinas con cierto tipo de características organizativas, con cierto tipo de expresión político gremial; o sea en nuestra particularidad podemos citar a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas **MCNOC**, la Federación Nacional Campesina **FNC**, la Organización Nacional Campesina **ONAC**, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas **CONAMURI**, el Movimiento Campesino Paraguayo **MCP**, entre otros.

Y aunque prácticamente todas esas organizaciones sean “herederas” de las llamadas Ligas Agrarias Campesinas que se desarrollaron con mayor intensidad en la década del 70’ son

⁴ Con relación al término “**Movimiento Social**” podemos decir que para los efectos del presente artículo nos circunscribimos a la connotación de movilización orgánica de un cierto segmento de la sociedad orientado a fines de carácter reivindicativo que busca la modificación o mantenimiento de una cierta situación socioeconómica.

diferentes de ellas tanto en sus formas organizativas como también en algunos casos en las mismas demandas planteadas.

Pero dónde radica de manera precisa la importancia de la diferenciación terminológica expresada anteriormente?. Radica, fundamentalmente en que muchas veces cuando nos estamos refiriendo a un “Movimiento Social Campesino” determinado en realidad nos estamos refiriendo a una forma de expresión de este movimiento, y el auge o decadencia de ese “Movimiento” que en realidad es una “Organización” a través de la cual se expresa dicho movimiento, nos lleva a deshistoricizar dicha situación cuando concluimos en análisis exitistas o fatalistas en extremo.

Debemos considerar que las Organizaciones sociales campesinas se encuentran en constante Movimiento, y que muchas veces cuando no aparecen en escena algunas organizaciones no podemos descartar la existencia de dicho Movimiento, sino más bien indagar en el estado de su devenir histórico particular.

Tomemos como ejemplo las movilizaciones del año 2.002 encabezadas por el “Congreso Democrático del Pueblo” en donde la vanguardia de la acciones estuvo desde un primer momento en manos de las organizaciones campesinas a pesar de que la cuestión referida a las luchas contra las privatizaciones de las Empresas Públicas podría no tener sentido para el mundo campesino (como bien se encargaron de propalar por los medios de comunicación de masas todos los sectores oligárquicos) y en apariencia era un tema que debería ser llevado adelante por el movimiento sindical; será que no existía el movimiento obrero por no tener un papel protagónico en el escenario de luchas y confrontación con el Estado?, o será que debemos plantearnos que las organizaciones del movimiento obrero que surgieron en los últimos años de la lucha por la caída de la dictadura de Stroessner (y que siguen siendo básicamente las actuales) se encuentra en un momento de su movimiento de decadencia y putrefacción total en cuanto forma histórica ?

En ese punto es importante señalar que la relación entre movimiento campesino y movimiento sindical no solamente se encuentra es ocasional y sumamente frágil, sino que inclusive en comparación a la relación existente a principios de la apertura democrática post golpe hoy en día la relación está muy minada en lo que se refiere a la construcción de un movimiento unificado de trabajadores/as y campesinos/as.

En ese marco los Movimientos Sociales Campesinos precisan de una definición con relación a su “Oposición”, o sea, quienes son los enemigos históricos; además la construcción de una “Identidad, esto es, a quienes representa en la estructura social; y finalmente, lo que podríamos definir con el nombre de “Totalidad”, o sea, cuales son los valores u objetivos históricos que dieron origen a su Movimiento, hacia donde apunta la lucha⁵.

⁵ Estudiosos de los Movimientos Sociales como el caso específico de Alain Touraine, coinciden en afirmar que dichos “Principios” de Oposición, Identidad y Totalidad, no son principios teóricos construidos o elegidos por los miembros de los Movimientos Sociales, sino que constituyen relaciones sociales concretamente vividas por ciertos sectores de la sociedad, en donde el “enemigo” o el “aliado” debe ser procurado en la dinámica de intereses materiales de la estructura social y no en la simpatía o antipatía que generan ciertos “dirigentes” de las organizaciones sociales. En ese sentido, ¿es aceptable que el movimiento campesino recurran a la construcción de

Un elemento más que completaría el cuadro sería la consideración de diferentes tipos de organizaciones sociales campesinas en la actualidad paraguaya, entre estas podemos encontrar a las organizaciones de los “Sin Tierra” que probablemente ante la “opinión pública” sean los más notorios, estos claramente enfrentados con los terratenientes que se agrupan principalmente en la Asociación Rural del Paraguay, pero también están organizaciones de pequeños productores cuyos ingresos en la mayoría de los casos solo mal permiten la manutención física y en algunos casos ni eso; estos sectores se agrupan en organizaciones de tipo vecinal que solo representa a los miembros de un asentamiento, o de tipo distrital llegando a agrupar a grupos de diferentes comunidades o asentamientos de una circunscripción determinada, a esto hay que agregar las que son de tipo departamental, además es importante que en casi todos los casos tienen algún vínculo con alguna organización de tipo nacional.

Este último elemento de comparación, organizaciones “grandes” vs. “organizaciones pequeñas”, nos remite a una acostumbrada práctica de la izquierda orgánica partidaria en el país, que es el de apreciar o despreciar ciertas organizaciones por su “cantidad” y no por su “cualidad”⁶, a esto se suma el que muchas veces nos encontramos con prácticas de la izquierda partidaria que en “Mesas de negociación” apelan a su “influencia” o su “dirección” sobre tal o cual organización, como un arma de negociación, y fundamentalmente al tratarse de organizaciones cuantitativamente numerosas, incurriendo en una relación meramente utilitarista.

Organizaciones campesinas y Organizaciones partidarias, una tortuosa relación.

En la famosa compilación de artículos de Lenin bajo el título de “La formación de Cuadros” encontramos de manera explícita en diferentes pasajes de sus escritos indicaciones de cómo “El Partido” – a través de sus cuadros -debería relacionarse con la masa del pueblo, y entre esos escritos encontramos la famosa frase de que el cuadro del Partido debe constituirse en “la correa de transmisión” de las líneas partidarias hacia el pueblo.

A nadie es ajeno que en nuestro país la absoluta mayoría de las organizaciones político partidarias de izquierda se reivindican como tributarias del legado de Lenin y en ese sentido muchas veces se toman de manera literario-formal sus “instrucciones” y se las aplica sin el uso del tamiz histórico a nuestra realidad.

“alianzas” con sectores pertenecientes al sector oligárquico de la sociedad? Como por ejemplo el caso del dirigentes campesinos que con la excusa de “entrar al interior de la estructuras para impulsar el cambio” forman parte orgánica de proyectos político-electorales claramente defensores del régimen imperante, como si fuera una relación utilitaria donde “el dirigente campesino” o “su organización” podrán embaucar a los dueños de los Partidos tradicionales o “nuevos sectores independientes”, haciendo que estos “entreguen espacios de poder” para que luego vayan contra sus intereses de clase; véase el caso del dirigente de la ONAC Estanislao Martínez. ¿Ocupación de espacios o cooptación?

⁶ Cualidad y calidad, entendida la diferenciación como, en el primer caso hablado de sus propiedades intrínsecas en cuanto movimiento histórico, y la segunda (calidad) como la forma y capacidad orgánico-política de la agrupación.

Con dicha crítica no estamos reivindicando partidarios de aquellas posiciones “gremialistas” que rechazan la actividad partidaria y consideran que la acción de la izquierda en los movimientos campesinos solo sirve para “truncar procesos” e “irrespetar subjetividades” sean estas individuales o colectivas. Pero parece que ante la constatación innegable de la existencia de una conflictiva relación entre formas partidarias y formas sociales-reivindicativas de organización no podemos tan simplemente caer en aceptar una de las dos posiciones cayendo en la trampa maniquea de o “lo social” o “lo político”.

Por dónde pasaría entonces la relación?

Cuando una organización campesina, en su lucha sectorial trata de inscribir sus reclamos en el ordenamiento institucional de tal manera a garantizar el cumplimiento de sus demandas históricas, o inclusive de modificar las estructuras socioeconómicas de dominación capitalista, estamos entonces en presencia de un campo compartido con el movimiento político revolucionario.

Pero si por un lado tenemos a ciertos sectores de la “izquierda orgánica” criticando el llamado nivel de “conciencia en Sí” como un estadio de estancamiento y parálisis del movimiento social campesino reivindicativo, por el otro tenemos a sectores del movimiento campesino criticando la participación de la izquierda partidaria en las luchas sociales reivindicativas, acusándolos de “intrusos”.

Tenemos así, por un lado, un localismo y particularismo gremialista que se agota en la búsqueda de reformas del sistema y considera que la posibilidad del cambio social vendrá de la mano de un proceso de “cambio de voluntades” o “concientizaciones”, como si el problema de la estructura de clases de la sociedad lo constituyera la “conciencia” de ciertos gobernantes institucionales y se remitiera al “cambio” de una serie de ideas por otras, vía marketing social o algo similar, o peor aún, la snobista postura de la lucha por el “anti-poder” que considera la necesidad de alejarse de toda acción orgánica que se vincule con el Estado de tal manera a construir un “anti-poder” desde fuera de el Estado⁷.

Por el otro lado el seudo “universalismo” de la izquierda partidaria que en muchos casos – no en todos, no siempre y probablemente hoy menos que antes – intenta “concientizar” a las organizaciones campesinas de la “necesidad” de colocar sus demandas en la perspectivas universalistas de la “Conciencia para Sí”, conciencia que el “Partido” cree ostentar por una simple declaratoria literaria.

El problema de la concepción de la “Correa de Transmisión” es que considera a “El Partido” como algo distinto y exterior al movimiento social, como un ente superior cuya tarea es la de

⁷ Como no es el tema del presente trabajo no nos extenderemos en demasía polemizando con dicha posición, aunque parece importante dejar presentes algunas consideraciones. En el fondo lo único que hace es contribuir a reforzar el renunciamiento de la lucha por la superación del Capital en cuanto sistema de relaciones sociales de producción y reproducción vital humanas. El ver al Estado como un “Ente” externo, del cual los movimientos populares no forman parte real (y no hacemos referencia a la formalidad legal) y que pueden “combatir” en nombre de un Anti-Estado como si esto fuera una “decisión” política y no un movimiento histórico, parece de la ingenuidad más infantil.

dirigir a las masas insatisfechas e ignorantes de sus objetivos históricos a la liberación total en un lejano y remoto socialismo con la “Toma del Poder”.

Pero si el verdadero objetivo final de todo Partido revolucionario es el de la “toma del poder” para la abolición del régimen capitalista, debemos tener en cuenta que esto se trata de incorporarse al movimiento histórico de negación del Capital en cuanto movimiento histórico particular.

Y este movimiento histórico que se expresa en un movimiento social a través de organizaciones sociales – como vimos anteriormente – es el que debe ser captado por el Partido que se precie Revolucionario, que debe procurar su vinculación directa, rompiendo la división maniquea entre Organización Social y Organización Partidaria, en ese sentido el camino debería apuntar hacia la conformación de un “Partido-Movimiento” que se encause en las luchas de las organizaciones sociales pero que sea conciente – en su práctica concreta – que la misma dinámica de las asociaciones reivindicativas no puede ser totalmente reducida a las necesidades orgánicas de el Partido.

A modo de Conclusión

La debacle del campo socialista manifestó y cuestionó viejas tesis acerca del poder revolucionario, popular: el poder no solo se conquista por asalto, sino que hay que irlo construyendo desde las mimas entrañas de la sociedad que se quiere transformar, en la cual el sujeto constructor y sus luchas han de ocupar un papel central(...)⁸

Deberíamos entonces retomar los caminos exploratorios referidos al problema del relacionamiento desde otra perspectiva y para eso parece importante apuntar algunos elementos que nos ayuden a construir una conclusión provisoria, por supuesto limitada por los mismos fines del presente artículo.

De lo que se trataría sería de explorar los caminos que permitan avanzar hacia la construcción de una herramienta de liberación y emancipación del campesinado en cuanto movimiento social-histórico de ésta estructura social; entendiendo el concepto de herramienta como algo construido históricamente con un fin determinado, en este caso se trataría de la lucha por la superación del sistema capitalista.

La capacidad de vincular las problemáticas particulares con las universales sería uno de los requisitos fundamentales para el objetivo procurado. Por ejemplo, la capacidad de construir una herramienta de lucha que permita vincular una reivindicación particular, digamos la lucha por la Reforma Agraria, con un planteamiento universal, o sea la superación de la sociedad actual que es la responsable y a la vez se basa en la actual estructura de poder

⁸ Juana Rosales García; Movimientos Sociales y Democracia en América Latina en los '80's, en Democracia, Derecho y Sociedad Civil; Editorial de Ciencias Sociales, La Habana - Cuba, 2.000, pag. 44.

económico-político-social, y que no permite la solución total debido a los límites intrínsecos a ella misma.

En esta perspectiva la estructura de tenencia de la tierra o el llamado monocultivo no es producto de una simple decisión política que pueda ser modificada con un Ley o un Código o cualquier cosa que se le parezca, sino que más bien es la forma en que se expresa de manera particular el sistema internacional en el que se inserta el Paraguay. Romper ese esquema plantea el desafío de la superación de mismo orden en el que se inscribe la sociedad paraguaya, superar la misma estructura de clases de la actualidad.

Otro elemento sería el referido a la “Toma del Poder o Construcción del Poder” Popular; retomando algunos elementos colocados anteriormente como ser el de “Toma del Poder” o de “Correa de Transmisión”, podríamos afirmar que no se trata de ver a las organizaciones campesinas como simples espacios de “captación de nuevos/as militantes” que se constituyan en “Correas de Transmisión” de la línea del Partido para avanzar hacia la “Toma del Poder”. Esta visión, todavía muy impregnada en la práctica actual, reduce toda organización a una lógica estática y formal que no consigue plantear al movimiento en cuanto tal, o sea, en cuanto movimiento.

De lo que se trataría sería de la lucha por la Construcción del Poder Popular, como requisito previo ya a la misma derrocada del poder, para su posterior toma de control. Podría resultar un aparente juego de palabras, pero lo que explícitamente debemos plantarnos es que la lucha por la simple “toma del Poder” concibe a “el poder” como un “objeto” del cual un Partido se apropia, y no como un movimiento de relaciones sociales de producción en donde de lo que se trataría en una sociedad revolucionaria no sería del simple cambio de “administradores del poder”, sino que de la construcción de un nuevo tipo de poder, de un poder que destruya la misma organización del Estado actual y no que simplemente reemplace a sus gestores.

En ese sentido las organizaciones sociales, y principalmente las campesinas que en la última década demostraron su indiscutible peso específico en la escena nacional, constituyen un espacio privilegiado de construcción de un poder popular, a condición de aumentar cada vez más en el desarrollo de prácticas, estructuras y conductas que desafíen la misma formalidad del orden y apunten a construir un nuevo orden desde antes de llegar a él.

No existe una solución al problema de la relación Partidos revolucionarios – Organizaciones Campesinas si se lo plantea en términos dicotómicos, esto es, cada uno en un esfera totalmente diferente. La alternativa sería la de intentar conjugar la acción orgánica revolucionaria social del Partido con el curso del torrente de movilización de las organizaciones campesinas y de la ciudad ; se nos plantea en ese sentido la construcción de un Partido-Movimiento, en donde los “cuadros” partidario no son simples “correas de transmisión”, sino que son los mismos militantes de la lucha social, en donde la organización partidaria es a la vez la parte integrante y vital del movimiento social.

Finalmente; la construcción de una herramienta de lucha emancipadora del campesinado y del pueblo es una tarea que no fue iniciada días atrás, está forjada por una larguísima experiencia de generaciones enteras, en ese sentido no puede ser planteada como una “brillante idea” que

apareció ahora. Pero de lo que si se trataría sería de conocer y reconocer esa y en esa historia nuestra continuidad, somos hoy hijos/as de largas luchas por la emancipación humana; ¿qué se hizo o se dejó de hacer?, ¿dónde se cometieron errores y cuales fueron?, ¿por dónde pasan hoy en día las principales contradicciones del sistema, cuya lectura precisa nos permita andar ya gran parte del camino?; quienes son hoy los sujetos revolucionarios con quienes el “Partido-Movimiento” debería construirse a sí mismo⁹?. Tal vez muchas otras interrogantes se nos planteen, tal vez interpretaciones diferentes podamos tener con relación al tema, pero la respuesta práctica a dichas interrogantes será la que finalmente nos permita avanzar, pues como ya hace bastante tiempo atrás Marx planteaba en su polémica con Feuerbach a cerca del papel de la filosofía, “Los filósofos no han hecho más que *interpretar* de diversos modos del mundo, pero de lo que se trata es de *transformarlo*”. Así que respondamos nuestras interrogantes a partir de la lucha por la transformación social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Marx, Karl; El Capital; Editorial Siglo XXI, México DF, 1996.

Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco: "Redes que dan Libertad" 1.994 Barcelona – España.

Documentos de la Corriente Gremial Campesina de la MCNOC, Diciembre de 2002.

Juana Rosales García; Movimientos Sociales y Democracia en América Latina en los ´80´s, en Democracia, Derecho y Sociedad Civil; Editorial de Ciencias Sociales, La Habana - Cuba, 2.000.

⁹ Cuando hacemos referencia a “Sujeto revolucionario” no lo utilizamos como sinónimo de “Sujeto Histórico”; esa discusión podría ser encarada en otro momento.

EL PT SE MIMETIZA PARA HACER VIABLE UN NUEVO LIDERAZGO DE LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

Edwin Brítez

Edwin Brítez, Lic. en Periodismo por la UNA. Hizo estudios especializados en comunicación en Ecuador, usufructuando una beca de la OEA. En la universidad de Austin, EE.UU. participó de un curso de política exterior.

También participó de cursos, seminarios y congresos sobre Periodismo de Investigación, Comunicación y DD.HH. en Portugal, Alemania, Puerto Rico, Chile, Uruguay y México. Invitado por gobiernos de EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica, conoció instituciones políticas de dichos países. Es columnista y jefe de Política del diario ABC Color. Juntamente con monseñor Mario Melanio Medina, Alcibiades González Delvalle y José Luís Simón fundó la revista Nuestro Tiempo, durante la clausura de ABC.

Fue Secretario Ejecutivo del Comité de Iglesias.

En coautoría con José Nicolás Morínigo escribió Democracia Tramparente. También es autor de varias investigaciones sociales.

El PT se mimetiza para hacer viable un nuevo liderazgo de la izquierda latinoamericana

Edwin Britez

1. PERFIL DEL NUEVO PRESIDENTE

Luiz Inacio "Lula" da Silva, 56 años, antes de ser presidente electo de la República Federativa del Brasil, fue vendedor callejero, mensajero, ordenanza de tintorería y obrero de tornería, donde perdió un dedo. Aunque abandonó sus estudios en el cuarto grado del ciclo escolar se destacó como líder sindical y luego líder del Partido de los Trabajadores (PT), que se fundó bajo su inspiración e impulso.

Lula buscó la presidencia de su país en forma persistente desde las elecciones de 1989, año de la caída del muro dictatorial en Paraguay, en coincidencia con el muro de Berlín. Desde entonces está en la preferencia de las intenciones de voto, pero al final los brasileños votan a otros. Así ocurrió en tres ocasiones consecutivas, mas no lograron desanimar a este singular combatiente.

En 1989 cuando estuvo más cerca de ganar "se dio la unidad de los sectores conservadores, medios de comunicación y empresarios en contra nuestra", explicó en aquella oportunidad.

Las de 1994 no fueron unas elecciones donde un hombre luchó contra otro, sino de un hombre contra un poderoso proyecto económico de Estado: el plan Real impulsado por Fernando Henrique Cardozo (FHC) y que fue la herramienta para terminar con la hiperinflación que entonces sacudía al país. La segunda derrota no le produjo amargura alguna.

En 1998 volvió a enfrentar a FHC y de nuevo fue derrotado, a pesar de que el Real ya no tenía tanta consistencia y era inminente el estallido de la crisis, que efectivamente estalló después de las elecciones con la fuga de capitales y una tremenda desconfianza hacia el sistema financiero del Brasil que desembocó en la devaluación y su inevitable repercusión en todo el continente americano.

Los brasileños saben que Lula tenía razón en sus críticas a FHC, un conocido y respetado sociólogo, que goza del aprecio especialmente de la izquierda latinoamericana y de la intelectualidad europea, pero no lo volvieron a votar. Un empresario conservador había graficado grotescamente su opción electoral entre Cardozo y Lula de esta manera: "Si le pasamos la mano al primero, nos lleva el anillo; el segundo se lleva el anillo y el reloj".

2. QUÉ TIPO DE SOCIALISMO SE IMPLANTA EN BRASIL

"Nunca hemos defendido un Estado estatista, sino un Estado público. Nunca nos opusimos a la inserción del Brasil al mundo globalizado. Lo que queremos es que Brasil tenga un proyecto propio. Esto está vigente hoy porque el Estado brasileño ha desmontado el sector público. Ha

vendido casi todo con la excusa de resolver los problemas de la educación y de la salud. Pero todo ese dinero se canalizó a pagar la deuda".

Este era el discurso de Lula poco antes de ser candidato por cuarta vez y que evidentemente estaba dirigido a conquistar un electorado no de la izquierda. "No solo hay que estar en contra, yo no necesito decir que soy de la oposición, porque hace 20 años que lo soy, pero si estoy seguro que la sociedad brasileña exige más de la izquierda y del PT".

Ya para entonces le disputaban seriamente la candidatura otras figuras también relevantes del PT, como Olivio Dutra, gobernador del Estado de Rio Grande do Sul y Antony Garotinho, gobernador del Estado de Rio de Janeiro.

De cara a su candidatura por cuarta vez consecutiva, Lula era consciente del temor que despertaba en la cima del poder internacional.

"Los efectos políticos de una eventual victoria del izquierdista Partido de los Trabajadores en Brasil podrán ser peores aun que los efectos económicos, pues quedaría constituido un eje Castro-Chavez-Lula capaz de empujar hacia la izquierda a otros países sudamericanos y de establecer una peligrosa alianza estratégica con China comunista, así como con Iran e Irak, dos países terroristas", advertía meses antes de su victoria Constantine Menges, investigador del Hudson Institute y exasesor de seguridad nacional de la presidencia de Estados Unidos para deleite de quienes temen el retorno del comunismo en el continente de la mano del actual presidente brasileño.

Para la derecha, que es dueña de la economía brasileña, el pasado de Lula es motivo de desconfianza, sobre todo por haber impulsado, juntamente con Fidel Castro, el Foro de San Pablo en 1990 con el fin de reagrupar a todas las fuerzas comunistas, procomunistas y algunas de ellas tildadas inclusive de terroristas en el continente.

Sin embargo, el Lula instalado hoy en el Planalto es totalmente distinto al activista, sindicalista y líder de izquierda de los 20 años de llanura.

La mentalidad de los nuevos gobernantes brasileños y de la dirigencia más alta del Partido de los Trabajadores se orienta a la construcción de un proyecto de país antes que a la consolidación de un proyecto socialista en el Brasil y en el continente.

José Genoino, presidente del PT, en la entrevista que nos concedió en Brasilia se explayó sobre la misión de su partido y el desafío de tener un presidente de izquierda en un país de economía capitalista.

"El gobierno de Lula no será un gobierno socialista, éste no será un gobierno socialista, si bien Lula es socialista; yo soy socialista, pero el socialismo en el gobierno para nosotros es apenas una referencia. Este será un gobierno de reformas y lo que aspiramos es llegar a construir un socialismo democrático humanizante", sintetizó Genoino sobre el rol de su partido en función de gobierno. Genoino también arrastra un pasado de activismo clandestino, pero en su actual

calidad de diputado demuestra una extraordinaria madurez política capaz de ocultar su entusiasmo por la ideología política para dar lugar al pragmatismo gubernamental.

Esta postura sumamente flexible le valió a él y a otros miembros del primer anillo de Lula el calificativo de "neoliberal" por parte de sus propios compañeros del ala dura del PT, quienes se sintieron extrañados y traicionados por los primeros anuncios de medidas económicas y nombramientos sorprendentes del gobierno petista.

Pero los hombres del PT parecen saber lo que hacen y sobre todo demuestran estar seguros de lo que quieren. "El PT será la negación de las dos tragedias que registra la historia de la izquierda en el continente: La primera es que la izquierda se aísla y sale derrotada; la segunda es que recurre a las armas y es exterminada".

"Nosotros no vamos a cometer esos errores y tampoco vamos a recurrir a un tercer error: Ser utilizado por la derecha para el cumplimiento de sus fines y terminar como simples accesorios de ella. Nosotros vamos a comandar la reforma de este país, pero como no podemos hacerlo solos, estamos demostrando nuestra voluntad de diálogo y predisposición a las alianzas para construir una NUEVA IZQUIERDA, MODERNA Y DIALOGUISTA", definió Genoino.

Y agregó aún más, estas negociaciones tienen un modelo donde el centro será la producción que sea capaz de generar empleo y distribuir mejor la renta, porque queremos más inversiones pero al mismo tiempo queremos hacer fuertes inversiones sociales.

Lo que Genoino y otros ideólogos del PT intentan vender a sus seguidores es la idea de que el partido no renunció a su vocación social y que llegará el momento en que se pueda cumplir la meta de lograr un país socialmente justo, económicamente fuerte y de relaciones solidarias con el mundo.

3. LOS PRIMEROS 30 DÍAS DE LULA

La gran ventaja del PT, como partido de izquierda es la legitimidad del presidente electo, a lo que debe sumarse el cariño que le tiene la gente, por lo menos en los primeros días de gobierno.

Lula no solamente obtuvo mayoría de votos sobre los demás candidatos sino que también consiguió el consenso para la segunda vuelta, lo que ya permitió ver la capacidad negociadora del PT, ya que este logro requirió de una verdadera ingeniería política.

Brasil es un país que tuvo importantes reformas durante los dos períodos de FHC, pero necesita mucho más y con urgencia. Lo fundamental es el seguro social, que se lleva gran parte del ingreso fiscal para la jubilación de los funcionarios públicos. En este punto Lula necesita tomar medidas drásticas muy similares a las medidas neoliberales, lo que provocará la primera reacción fuerte de su propio partido.

Pero la salida a las calles del PT en contra de Lula está presupuestado sin muchos sobresaltos para los ideólogos del partido. Algunos, inclusive lo ven como algo necesario para que en función de gobierno no se olviden de sus compromisos sociales.

Desde luego, después de las elecciones y la victoria de Lula, una cosa es el presidente electo, otra cosa es el gobierno, otra cosa es el PT y otra distinta son los sindicatos que dieron vida al PT. Ninguno de ellos hoy pueden hacer lo que les gustaría realizar. Por eso calculan que el ala dura del PT no se irá, podrán salir a las calles, pero si se van se aíslan y serán derrotados.

No hay otra alternativa para el presidente brasileño. O aprovecha su alta popularidad de 83 por ciento o deja pasar el tiempo para hacer las reformas y en este último caso, con toda seguridad tendrá que enfrentar mayor cantidad de inconvenientes.

"Si no hacemos esto hoy, mañana tendremos que declarar el apartheid en el Brasil y los pobres andarán por un lado y los ricos por otro. Si no hacemos la reforma, un nuevo líder carismático se hará cargo del problema y lo resolverá a su manera", dijo Cristóbal Buarque, ministro de Educación durante la entrevista que mantuvimos con él en su despacho.

4. EL BRASIL QUE RECIBE EL PRESIDENTE

Lula tiene en el arranque de su gobierno una especie de carta blanca de la sociedad para hacer lo que tenga que hacer. Según las encuestas, la ciudadanía no está impaciente por el cumplimiento de sus promesas. No esperan grandes cambios, en esta etapa y por lo menos durante un año.

Tres escenarios posibles existen para Lula de acuerdo a sus gestiones en la primera magistratura del Brasil.

1. Que las reformas sean aprobadas ni siquiera como un plan revolucionario sino simplemente con un criterio de modernidad. Detrás de esto viene la casi segura reelección de Lula.
2. Que el nuevo gobierno siga con las gestiones iniciadas por FHC en cuyo caso podría sostenerse a duras penas la economía y el PT no podrá cumplir sus promesas sociales. Algunas de las medidas para hacer viable esta alternativa son, recorte de presupuesto aprobado del 15 por ciento, eliminación de los gastos superfluos, aumentar las exportaciones y moralizar la administración pública.
3. Que fracasen todas las reformas y en poco tiempo se reproducirá invariablemente en el Brasil el argentinazo.

Todo dependerá de los ingenieros de la gobernabilidad de este país de 170 millones de habitantes (la mitad de sudamérica) y un territorio-continental de 8.511.765 km². (2,5 el tamaño de Europa Occidental), y dependerá también de que el PT y sus hombres en el gobierno privilegien la ética a la ideología, la solidaridad y la transparencia a las posturas revolucionarias, que al parecer es la base de su éxito para tener un perfil bajo frente a la desconfianza de los capitalistas, que no bajan del todo la guardia.

Sin embargo, para Brandford De Long, profesor de la Universidad de California y ex secretario asistente del tesoro de EE.UU. "no sería inteligente caracterizar al presidente Lula como a un populista peligroso solo porque su base política se asemeja a la del díscolo Chávez".

Los partidarios más pobres del presidente Lula esperan que convierta a Brasil de ser la sociedad con mayor desigualdad del mundo a ser una democracia social moderna. Sus partidarios de clase media están ansiosos de ver mejorar sus estándares de vida. Pero a pesar de estas expectativas, es poco probable que Lula genere algo semejante a la caótica "revolución bolivariana" desatada por Chávez, opina el citado catedrático.

Para De Long, los especuladores e inversionistas de Londres y Nueva York esperan que Lula logre una hazaña similar al viaje de Nixon a la China Popular: que sea el izquierdista que equilibre el presupuesto, elimine el temor de los inversionistas extranjeros de no pago de la deuda mediante la hiperinflación y de ganancias de capital en sus acciones y bonos brasileños.

Así -prosigue el autor- el país lucirá más atractivo, pero esto requerirá una paciencia extraordinaria del PT y sus votantes. "¿Tendrá Lula autoridad suficiente sobre la política brasileña como para mantener satisfechos a sus partidarios y cuadros políticos con promesas de pasteles para mañana cuando está claro que hoy no habrá pan?", se pregunta finalmente. Lo cierto es que al parecer el PT, a pesar de la inexperiencia administrativa del presidente brasileño y del pavor que provoca en los capitalistas ultraconservadores la palabra "trabajadores" dentro de la denominación de un partido político, está haciendo el sacrificio de mimetizarse como un partido de centro izquierda en el campo político y de centro derecha en el económico, para hacer viable un liderazgo alternativo de izquierda en Latinoamérica; un liderazgo que esté dispuesto a reemplazar la guardia que puede quedar vacante en La Habana o en Santiago, ya que las de Caracas y Quito no parecen tener suficiente consistencia ni sustentabilidad.

ENCUESTAS PREELECTORALES: ¿INSTRUMENTO DE ANÁLISIS O DE MANIPULACIÓN?

Marcello Lachi

Marcello Lachi, Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de los Estudios de Siena (Italia).

Coordinador del Proyecto de Transparencia Administrativa y Participación Popular por la Municipalidad de Sovicille (Italia).

Director del proyecto juvenil de "Sexualidad Consciente" para la Municipalidad de Siena (Italia).

Fundador y Coordinador editorial del portal web ParaguayGlobal.com.

Actualmente analista político y coordinador de encuestas por el Gabinete de Estudios de Opinión, GEO de José Nicolás Morínigo.

De nacionalidad italiana, en Paraguay desde 1996.

Encuestas preelectorales: ¿Instrumento de análisis o de manipulación?

Marcello Lachi

Introducción

En 1989, el ex director del diario Atlanta Constitution, Bill Kovach, declaraba al reconocido diario New York Times: "Cada día, en cada quiosco, hay una publicación que presenta como exclusiva una encuesta de opinión que nos explica lo que pensamos con respecto a un problema. Y casi cada día las encuestas nos dicen, más o menos exactamente, la misma cosa que el diario que le publica piensa con respecto al problema objeto de la encuesta misma", desde entonces la situación no ha cambiado mucho. (1)

La crítica hacia la validez de la encuesta de opinión no es algo de los últimos años, sino un tema que se arrastra desde los primeros días en que, el estudio de la opinión pública realizado a través de entrevistas a pequeños grupos de personas representativas de la entera colectividad, empezó a ser utilizado en muchos ámbitos económicos y sociales. Aunque quizás el primer caso importante a favor de la dudosa validez de las encuestas se registró en el 1936 cuando la revista Literary Digest fracasó clamorosamente en la predicción del ganador de la elección presidencial estadounidense, considerando que el 41% estimado por la revista para el Presidente Roosevelt se convirtió, en las urnas electorales en un 61% ganador. (2)

Quizás entonces, a raíz de esto, la fuerte polémica que se ha desatado en las últimas elecciones internas (Diciembre 2002) en los dos principales partidos políticos paraguayos: la Asociación Nacional Republicana - Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico, no debería sorprendernos mucho, considerando el historial de aciertos y errores que las encuestas electorales han mantenido durante todo su historial.

Pero el tema, además de haber estado al centro del debate político por varias semanas, ha llegado a afectar la credibilidad misma del instrumento de la encuesta preelectoral en Paraguay, poniendo en fuerte duda su utilidad como instrumento de conocimiento de las orientaciones electorales de la ciudadanía, y llegando hasta a definirlo como un instrumento para la manipulación de la opinión pública.

Puesto en esta óptica entonces, el cuestionamiento sobre la validez científica de las encuestas electorales en Paraguay, deja de pertenecer al campo del folklore electoral y se transforma en un verdadero caso político, un elemento que puede poner en riesgo la consolidación misma de la democracia en nuestro país. Por esto ya no podemos pasar de alto esta insinuación, sino más bien estamos obligado a fijar nuestra atención sobre el tema para verificar si estas acusaciones son realmente ciertas.

A que sirve una encuesta electoral

Antes de empezar a analizar el caso concreto creemos oportuno fijar brevemente la atención sobre lo que es y a que sirve efectivamente una encuesta electoral.

La sociedad moderna en la cual vivimos es una sociedad política compleja, llena de diferentes intereses que se contraponen y se influyen uno al otro constantemente. Interpretar el “sentir” de la opinión pública entonces se vuelve cada vez más difícil, porque muchos son los factores que influyen en su construcción, desde la formación escolar, hasta su colocación social, y hasta los medios de información que utiliza para enterarse de lo que pasa en la sociedad y en el mundo.

Por esto las encuestas de opinión pueden ser un instrumento muy útil para interpretar lo que piensa la ciudadanía sobre diferentes cuestiones que le afectan, porque nos permiten "simplificar" esta complejidad en datos cuantitativos, lo suficientemente adherentes a la realidad para permitirnos interpretarlos analíticamente.

Desde el sencillo dato de adhesión o menos a una opinión, entonces, es posible reconstruir la opinión de la colectividad sobre lo más diferentes problemas; pero esto tendrá un valor realmente científico solamente si lo sabremos utilizar correctamente, a través de la constante comparación con otros datos y sin darle nunca un valor de absoluta verdad, sino más bien de relativo “acercamiento” a la verdad.

Finalmente nunca hay que olvidar que los sondeos de opinión solamente registran opiniones existentes en un momento dado, un momento que ya está en el pasado cuando la encuesta se publica y que seguramente pueden servir para interpretar la realidad, pero que nunca deben ser confundidos con la realidad misma.

¿Se pueden manipulan las encuestas?

Establecido que las encuestas de opinión pueden ser un instrumento muy útil para interpretar la realidad en la cual vivimos, hay que verificar cuanto creíbles puedan ser. Eso dependerá en gran medida en la forma en la que se hayan realizados, porque al lado de un normal error estadístico, siempre existente en toda encuesta, si se hacen mal las tareas, se puede sumar un error “sistemático” que puede llevara a falsear completamente los resultados finales.

Estamos hablando de cómo se haya estructurado la muestra, de cuanto es representativa del universo que se quiere analizar, del número real de entrevistas efectuada, de la capacitación de los encuestadores, de los métodos utilizados para elegir las personas a entrevistar, de la dimensión, las características y la difusión en el territorio de la muestra de población entrevistada, del texto de las preguntas a realizarse. Equivocarse en uno solo de estos elementos significa arriesgarse a obtener un resultado que no tiene realmente nada a que ver con la realidad.

Elegir hacer un número demasiado reducido de entrevistas, no seleccionar las entrevistas con una correcta subdivisión por edad, sexo o difusión territorial, no trabajar con personal

encuestador suficientemente entrenado por el trabajo, son elementos que pueden determinar errores determinantes en los resultados de la encuesta, comprometiendo de hecho el nivel de representatividad de la opinión de la ciudadanía, en los resultados final del sondeo realizado.

Pero aún más grave es el problema de la conformación del texto de la pregunta a realizarse a los encuestados. En este sentido el método de construcción de la pregunta puede ser un importante instrumento de manipulación de una encuesta de opinión, porque puede influir concretamente en la formulación de la respuesta final, generalmente en función de los intereses del cliente que comisionó a la encuesta.

Pedir a una misma muestra representativa de electores: "¿Está usted a favor o contra la pena de muerte?" o "¿en un país democrático con leyes claras y tribunales ecuanímenes es justo condenar a muerte a un hombre que mató un niño después de haberlo torturado?" no dará nunca el mismo resultado. El resultado obtenido con la primera pregunta podemos considerar que representa bastante fielmente la opinión de la ciudadanía, mientras el resultado obtenido con la segunda pregunta resultará, aunque no se modifique ninguna de la respuestas otorgada, seguramente y definitivamente manipulado por la empresa encuestadora. (3)

Análisis del caso concreto: elecciones interna de ANR y PLRA (dic. 2002)

Pasamos ahora a analizar el caso concreto de las elecciones internas para las elecciones legislativas de 2003 de la ANR y el PLRA, realizadas en diciembre de 2002.

Antes de comenzar hay que subrayar un dato importante, independientemente de cómo se hacen las encuestas, la posibilidad de error en una elección interna es generalmente más amplio de lo que puede obtenerse para una elección nacional. Esto se verifica porque en las encuestas sobre "internas" se analiza la intención de voto pero no se puede verificar la real posibilidad que el elector vaya realmente a votar.

En las elecciones internas los locales de votaciones son generalmente en número más reducido que para las elecciones nacionales, entonces se hallan generalmente más lejos de la casa del votante y en muchos casos la posibilidad que el elector pueda realmente votar depende fuertemente del hecho que algún movimiento lo recoja con un móvil para llevarlo al local de votación.

Este hecho claramente arriesga deformar mucho los resultados de las encuestas preelectorales con respecto al resultado final de la elección: sobretodo por lo que concierne la intención de voto a favor de los pequeños movimiento menos organizado, que por falta de un organización fuerte, tienen dificultad a transformar en votos reales la intención de voto a ellos favorable de los electores.

La consecuencia final es que, por estos movimientos, el margen de diferencia entre el resultado de la encuesta y el resultado real de las urnas, puede alcanzar niveles muy altos.

Establecida, entonces, esta limitación real de las encuestas preelectorales para las elecciones internas a los partidos, hay también que subrayar que esto es un límite que existe para todas las

empresas encuestadoras, y por esto aunque pueda afectar la verosimilitud de las encuestas con los datos que salen de la urna, debería afectar muy limitadamente las diferencias de resultados entre las encuestas mismas.

Y es propiamente con respecto al verificarse de estas diferencias, que ha surgido el problema de la credibilidad de las encuestas.

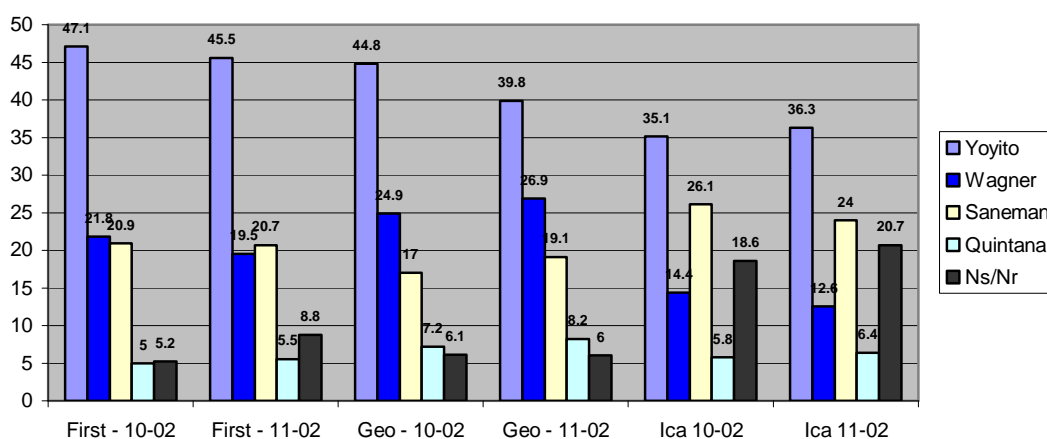
En las últimas elecciones internas han sido publicadas encuestas preelectorales de las internas del PLRA y de la ANR por parte de tres empresa: la GEO de José Nicolás Morinigo, la FIRST de Francisco Capli y la ICA de Luis Enrique “Taka” Chase.

Estas tres empresas han publicados varias encuestas, medianamente una por mes sobre cada interna (por la ANR se publicaron 2 en el último mes), pero es justamente la publicación de estos datos que ha desatado la polémica. Una polémica que no se ha limitado al sólito lema “las encuestadoras hacen ganar sus clientes”, acusación nada nueva y que ya es parte del folklore político en tiempo electoral, sino más bien se a centrado en la acusación que detrás de los datos publicados por las encuestadoras había una “conspiración” para manipular la intención de votos de los electores a favor de algunos candidatos y en contra de otros.

La acusación es grave y necesita una verificación.

Empezaremos con la interna liberal, utilizando las dos encuestas publicada para las empresas encuestadoras en octubre y noviembre, cuyo resultados, por lo que concierne la elección a Presidente de la República podemos ver en el cuadro más abajo. (4)

Encuestas sobre Elecciones Internas PLRA - 2002



Teniendo a disposición solamente dos series por cada encuestadora no podemos verificar la existencia de una “tendencia” con respecto a la evolución del voto de cada candidatura, además generalmente cada encuestadora obtuvo a lo largo de sus dos encuestas resultados parecidos, de forma a considerar de hecho estable la evolución del voto interno al PLRA.

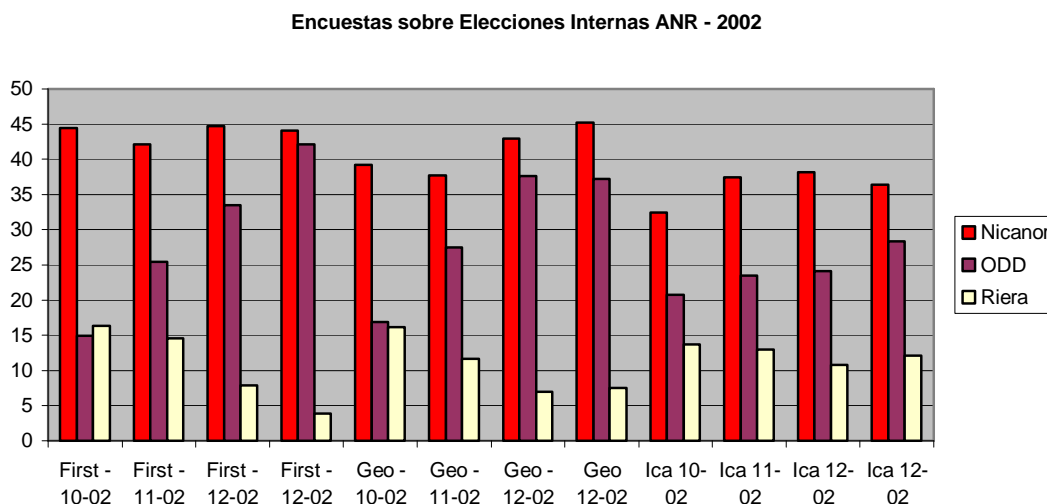
Lo que en realidad nos deja perplejos, y ha sido la razón de las acusaciones de manoseo de los datos por parte de algunos candidatos, son las enormes diferencias que se registran entre los resultados de un mismo candidato entre las encuestas de las diferentes empresas.

El candidato a Presidente de la República, Luis Alberto Wagner, parece en este sentido el más afectado. Entre los datos publicados por las tres empresas se registraba en octubre una diferencia entre el resultado mejor y el peor de casi el 12,3%, diferencia que se amplía en noviembre, pasando a un 14,3%.

Un problema similar se ha verificado también en las internas presidenciales del Partido Colorado, donde la crítica mayor ha sido con respecto al relevamiento del nivel de apoyo obtenido por Osvaldo Domínguez Dibb, el principal opositor a la candidatura “oficialista” en la ANR, en las diferentes encuestas.

Para esta interna tenemos más datos: cada encuestadora de hecho ha realizado una serie de cuatro relevaciones, una en octubre, una en noviembre y dos en diciembre (a quince-veinte días de distancia la una de la otra en este mes). Esta cantidad de encuestas nos permite analizar, además que las diferencias entre candidatos, las “tendencias” en la evolución del consenso de cada candidatura. (5)

En el cuadro más abajo vemos un resumen gráfico de las encuestas, limitado solamente a los datos de los tres principales candidatos al cargo de postulante a la Presidencia de la República por el Partido Colorado.

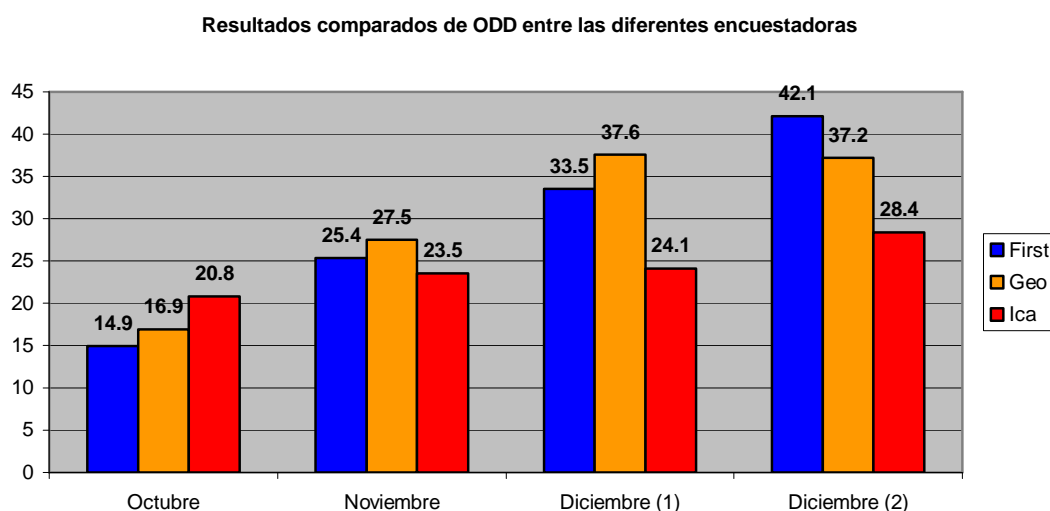


En el caso del Partido Colorado las diferencias entre los datos obtenidos por las diferentes encuestadoras ya aparecen a partir del análisis de la “tendencia” de crecimiento o caída en la intención de votos de los diferentes candidatos.

Por lo que concierne la candidatura de Riera: First e Geo pronostican una caída continuada en el apoyo electoral, mientras a ICA resulta, en cambio, una cierta estabilidad.

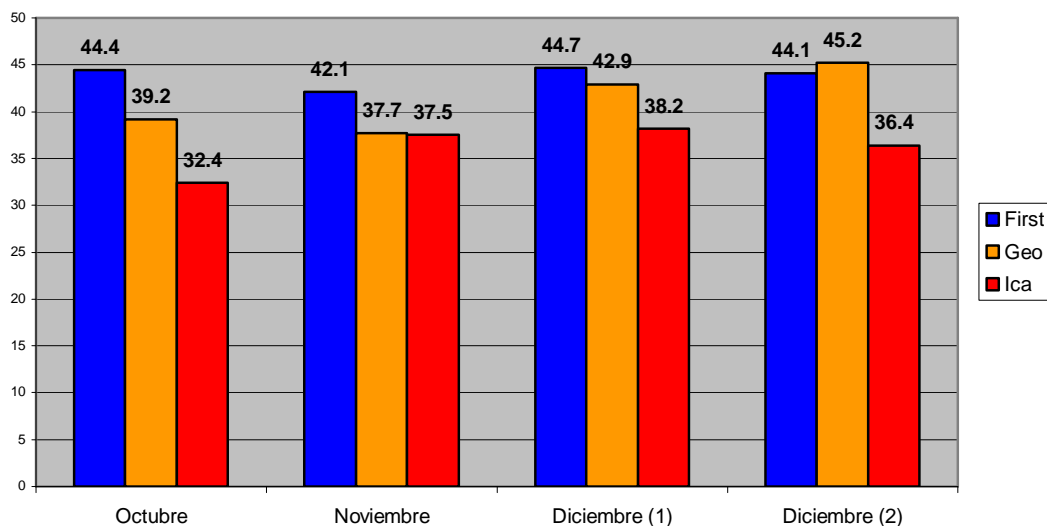
En cuanto a Osvaldo Domínguez Dibb (ODD) First ve un crecimiento sostenido, hasta llegar a un “empate técnico” con el candidato “oficialista” en la última encuesta. Geo por su parte ve si un crecimiento sostenido pero hasta alcanzar un máximo que no muda más en la última encuesta. Por ICA en cambio el crecimiento resulta limitado pero constante.

Analizando después las diferencias entre los resultados de las encuestas con respecto al posicionamiento de cada candidato, aquí las diferencias en los resultados de las relevaciones aparecen muy elevadas, sobretodo en el mes de diciembre. En efecto, mientras en octubre la diferencia en los resultados de ODD entre las diferentes encuestadoras era de un 5,9%, que bajó a un 4% en noviembre (datos suficientemente plausibles), en las dos encuestas de diciembre la diferencia creció a un 13,5 y a un 13,7 respectivamente en las dos encuestas.



También en los resultados del candidato oficialista, Nicanor Duarte Frutos, se verificó algo similar, aunque en forma mucho menos acentuada. En Octubre había una diferencia del 12% entre la estimación mejor y la peor de las empresas encuestadoras, en Noviembre la diferencia se redujo a un 4,6% para subir nuevamente en diciembre donde alcanzó antes el 6.5% y después el 8.8%.

Resultados comparados de Nicanor Duarte Frutos entre las diferentes encuestadoras



A este punto una pregunta surge obligada: ¿es posible que entre diferentes empresas que utilizan mismos sistemas de relevación estadísticas y una cantidad en el número de encuestas realizadas similares, que los resultados varíen de una a otro hasta más del 12%?

Claramente la respuesta a esta pregunta no puede que ser negativa. No es posible tener tan alto margen de error si todas las empresas encuestadoras están trabajando correctamente.

Una encuesta polietápica por conglomerados y afijación proporcional al número de inscriptos al registro electoral según departamento, con elección del entrevistado al azar y con corrección por sexo y edad, que resulte correctamente realizada, no puede tener un margen de error superior al 3-5% y entonces todos los resultados de las diferentes empresas encuestadoras no deberían diferenciarse entre si más que por este rango.

Pero como vimos las diferencias en las relevaciones existen y son muy amplias, demasiados podríamos decir, y esto nos lleva a una sola conclusión: independientemente del hecho que alguien esté o no esté manipulando sus encuestas, de todo modo es cierto que no todas las encuestadoras están haciendo bien sus tareas, y ya esto es algo bastante grave.

¿Influyen las encuestas en la opinión pública?

El hecho que haya “algo que no está bien” en como se realizaron las encuestas preelectorales para las internas de la ANR y el PLRA en diciembre de 2002, no determina automáticamente que el error registrado por algunas encuestadoras, sea que fuera debido a manipulaciones o a errores en la realización de la encuesta, haya influido efectivamente en modificar la orientación de voto de los electores.

En efecto, con referencia a la influencia que los sondeos electorales tendrían hacia la opinión pública al momento de tomar una decisión acerca de su propio voto, según el debate desatado en Europa entre los especialistas, tal influencia es realmente escasa, si no casi nula. Y en general, si se pudo apreciar una influencia, solo ha sido en la primera fase de la campaña electoral, cuando aparecen los primeros sondeos, y solamente respecto a los candidatos menos votados, que por el mismo hecho de no ser competitivos en las encuestas arriesgan de verse reducir aún más el apoyo alcanzado. (6)

Pero esto puede valer solamente por aquella parte del electorado que no expresa un voto "ideológico", es decir de apoyo al proyecto político del candidato, sino más bien un voto "útil". En este caso es posible que a frente de una encuesta no favorable al candidato inicialmente escogido, este elector busque posicionarse sobre otro candidato con más posibilidades de victoria, de manera de no desperdiciar su voto. De todo modo, aún en las sociedades más modernas y menos "ideologizadas", el voto útil difícilmente tiene una influencia determinante en el resultado final, y más bien otros son los factores que influyen en la toma de decisión del elector.

Todos los estudios de los últimos cincuenta años e en Europa y Estados Unidos apuntan a que el voto está generalmente determinado más bien por los intereses del elector, por sus ideas, por su identificación con uno u otro partido, por su percepción acerca de los líderes. Factores estos que resultan más influyentes que el sencillo dato sobre la oportunidad de apoyar o no el candidato potencialmente ganador. (7)

En conclusión no hay pruebas definitivas que confortan las tesis que las encuestas electorales influyan realmente en la toma de decisiones de los electores y si propio tenemos que ver este peligro, entonces, esto puede verificarse solamente a principio de la campaña, cuando el voto "útil" todavía esta a la búsqueda del candidato más "oportuno"; y no en las ultimas, cuando ya el voto de la gran mayoría de los ciudadanos se ha orientado de una forma u otra.

Pero eso no significa que las encuestas electorales no influyan de ninguna manera en el proceso electoral, porqué en un aspecto hay si muchos indicios, si no pruebas efectivas, que la encuesta electoral puedan influir en manera determinante. Estamos hablando del tema de la recolección de recursos económico por parte de los candidatos para la realización de sus campañas electorales.

Los candidatos, sobretodo durante las elecciones internas cuando no pueden contar con los recursos del partido, para hacer conocer su propuesta política a la ciudadanía y participar a la competencia electoral, necesitan de recursos propios. Esto implica la necesidad no solamente de poner personalmente fondos para la campaña electoral, sino también de buscar financiación externa, sea en forma de créditos otorgados por instituciones financiera, que en forma de donaciones realizadas por organizaciones, empresarios o personas con posibilidad de ofrecer dinero para financiar una campaña electoral.

En todos los casos, estos fondos difícilmente vienen entregados al candidato exclusivamente por un sentido del "deber" o por "solidarismo"; seguramente algunos caso aislado habrá, pero

generalmente quien ofrece dinero por una campaña electoral espera de obtener algo en cambio.

No estamos hablando exclusivamente de un intercambio directo de dinero por favores políticos a realizarse al momento de la elección a un cargo público. Puede ser sencillamente la posibilidad de hacer entrar en un cargo de la administración pública a un hombre de ideas similares al "donante", para que impulse políticas que el "financiador" considere importantes al fin de un mejoramiento de sus propias actividades comerciales o empresariales.

En cuanto a las instituciones financieras que prestan dinero, el tema es todavía más simple. Para ellos tiene sentido prestar dinero se consideran que el candidato o el movimiento deudor pueda obtener a través de las elecciones cargos públicos que les permitirán tener entradas suficientes para honrar las deudas

Pero en todo caso, el financiamiento al candidato o al movimiento interno, por préstamo o donación, es directamente en función de la posibilidad que el beneficiado pueda obtener el cargo político en pugna. Pero si la percepción del financiador es que el candidato no tenga ninguna posibilidad de obtener el cargo entonces no querrá de ninguna manera invertir su propio dinero con el riesgo de no obtener nada a cambio.

Por este motivo, del punto de vista de la búsqueda de recursos, las encuestas preelectorales pueden influir realmente mucho. Un candidato que a dos meses de las elecciones, cuando se realizan la mayor parte de los acuerdos para la financiación de la campaña electoral, aparezca en fuerte desventaja con respecto a su oponente directo, arriesga de verse cerrar muchas puertas y de no poder recolectar el dinero que necesita para llevara adelante su propuesta electoral.

En tal sentido una encuesta mal hecha o manipulada puede influir mucho en el correcto desenlace de una elección, porque puede "cortar las piernas" de antemano a un candidato, cerrándole de repente todas sus posibles fuentes de financiación.

Actitud de los medios de prensa sobre las encuestas

El daño que una encuesta mal hecho o manipulada pueda ocasionar a un candidato en su afán de buscar financiación a su proyecto electoral, además, resulta ulteriormente amplificado por el método poco ético en que los medios de comunicación generalmente utilizan en la publicación de las encuestas preelectorales.

Los medios, en efecto, no solamente generalmente no se preocupan del valor científico de la encuesta que publican, sino también, en cambio de presentar los resultados de la misma con "cuidado", buscan "gritarlos" en primera plana, transformando lo que por principio no es nada más que una representación indicativa de la realidad, como si fuera la realidad única e incontestable.

La utilización impropia por parte de los medios de las encuestas de opinión, entonces, se transforma en parte del problema. Demasiadas veces la publicación del sondeo por un medio de comunicación es en función de su posición políticas. Si los datos están concordes con las

ideas de la propiedad, el medio le da un amplio resalto; en caso contrario busca de todo modo poner más la atención del público en aquella parte de la encuesta que se acerca más a las posiciones políticas del medio.

La encuesta electoral entonces deja de ser un instrumento para interpretar la realidad y se transforma en un instrumento de propaganda política, acabando, por lo menos en referencia a los instrumentos de financiación, para influenciar la realidad misma que quiere interpretar.

Who watch the watchmen

¿Who watch the watchmen? Decía en una de sus principales obras el escritor inglés Alan Moore: "quien vigila los vigilantes". Transportando esta pregunta al campo de las encuestas de opinión podríamos preguntarnos: ¿Cual es la autoridad pública que vigila sobre la credibilidad y seriedad científica del trabajo de las empresas encuestadoras paraguayas? Claramente la respuesta es: ninguna.

En efecto, actualmente, ningún organismo público está prepuesto a garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener encuestas preelectorales seguras y confiables. Medios de comunicación y opinión pública están totalmente desprotegidos frente a posible manipulación de datos o a la falta de cientificidad del trabajo de las empresas encuestadora y solamente pueden confiar en su propia percepción para orientarse entre las diferentes ofertas.

Pero así no debería ser. Frente a las notables diferencias en los resultados presentados en los medios de comunicación por parte de las diferentes empresas encuestadoras, la ciudadanía debería tener el derecho de manejar instrumentos informativos que les permitan identificar la calidad del trabajo de cada una de ellas.

Quizás una forma para resolver, por lo menos en parte, el problema, podría ser la codificación de un Registro de las empresas que hacen encuestas electorales, dentro el cual las empresas estén obligadas a informar sobre su metodología de trabajo, sobre numero, identidad y capacitación de los encuestadores, sobre la topología y el contenido de las preguntas que se hacen durante las encuestas. Y que además los responsables de este Registro tengan el poder de verificar en el campo estos datos entregados por las encuestadoras, para comprobar se efectivamente las tareas se hacen como corresponde.

Naturalmente esto no impediría a los más "deshonestos", si hay, de continuar manipulando las encuestas modificando a golpe de "lapicera" los datos que no gustan al cliente. Pero es cierto que un verificación de la calidad metodológica de la encuestas por un organismo regulador ayudaría mucho en diferenciar las empresas que trabajan de manera corecta de aquellas que trabajan acientíficamente.

Conclusiones

Como hemos visto las encuestas preelectorales en Paraguay no está gozando de muy buena salud. Las diferencias excesivas entre los datos presentados por las diferentes encuestas publicadas por los medios de comunicación, así como la falta de cualquier forma de

verificación y control sobre la calidad de la misma, podrían producir un daño de credibilidad considerable.

Y no tanto porqué encuestas equivocadas, por errores o manipulaciones, puedan influir en el voto ciudadano, porqué ya vimos que así no es; sino porqué si las enormes diferencias registradas en las encuestas en las internas partidarias, continuarán a verificarse también para las elecciones generales, la encuesta electoral como instrumento para interpretar la realidad política podría perder, en el sentido común de la ciudadanía, cualquier valor científico.

El riesgo mayor es que, con el tiempo, no teniendo en el imaginario colectivo la encuesta alguna credibilidad, esto acabe para influir en los encuestados mismos, que no dando a estas más ningún valor, podrían empezar a rechazar en forma masiva ser encuestado, o peor todavía, responder falsamente a las preguntas para ridiculizar el encuestador. Todo esto con el riesgo que las encuesta de opinión pierdan, esta vez si en forma fehaciente, toda apariencia de veracidad.

La esperanza es que de un lado la ciudadanía sepa por si misma evaluar donde está la calidad del trabajo y el rigor científico y donde está la improvisación y la falta de seriedad; y por el otro lado que pronto se puedan activar en el país instrumentos legislativos o reglamentario que establezcan de forma definitiva el marco científico adentro del cual tienen que estar las diferentes empresas encuestadoras, para producir encuesta de opinión preelectorales ciertas y confiables.

Notas Bibliográficas

1. Eurispes, "Il problema della corretta informazione in merito alla situazione, attività, e problemi delle FF.AA.e la possibilità di ottenere dai sondaggi di opinione elementi della reale percezione validi per meglio indirizzare l'azione di informazione all'opinione pubblica", Roma, 1995.
2. Cándido Monzón, "Opinión Pública, comunicación y política", Ed. Tecnos, Madrid, 1996
3. Eurispes, Ob. Cit.
4. Encuestas de la Interna PLRA publicadas en: ABC Color del 28/10/2002 y del 29/11/2002; Última Hora del 29/10/2002 y del 11/12/2002; La Nación del 4/10/2002.
5. Encuestas de la Interna ANR publicadas en: ABC Color del 26/10/2002, del 26/11/2002, del 6/12/2002 y del 21/12/2002; Última Hora del 20/10/2002, del 4/12/2002 y del 17/12/2002; La Nación del 30/09/2002, del 3/11/2002 y del 5/12/2002.
6. Sani Giacomo, "Oracoli e sondaggi, istruzioni per l'uso, Revista Telemá, n. 1, Roma, 1995 (www.fub.it/telema/TELEMA1/Telema1.html)
7. Sani Giacomo, Ob. Cit.

TECNOLOGÍA Y VOLUNTAD POLÍTICA: EL VOTO INFORMATIZADO

Rafael Dendia

Rafel Dendia. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Abogado por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción.

Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, realizó estudios de politología en la Universidad de Bonn, becado por la Fundación Konrad-Adenauer.

Publicó libros y artículos en revistas especializadas sobre temas constitucionales y electorales, es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, Filial Coronel Oviedo.

Tecnología y voluntad política: el voto informatizado

Por Rafael Dendia

El gran desarrollo de la tecnología y, en especial, de la informática en nuestro tiempo responde a la necesidad de dar respuestas rápidas y sencillas a problemas complejos, y esa solución, a su vez, genera una nueva relación dialéctica para la propuesta de otros desafíos que van marcando el avance tecnológico. El desarrollo de la coherencia –no solo de misiles teledirigidos sino de vehículos interplanetarios- no sería posible sin el apoyo informático, ya que es impensable realizar cálculos manuales para corregir, por ejemplo, el curso de un cohete lunar; los grandes matemáticos estarían años calculando hasta poder conseguir una respuesta adecuada al problema planteado. Esta verdad de Perogrullo muy pronto será aplicada también a los sistemas de cómputos electorales, pues el voto informatizado no es sino un escalón en este proceso, que se da en todos los niveles de la actividad humana. En corto tiempo será imposible imaginar el conteo manual de millones de boletines de papel para conocer la voluntad política de un universo electoral.

Recordamos todavía al “contador público”, profesional muy respetado en el medio económico y administrativo, que tenía la responsabilidad de llevar los libros contables con fina caligrafía y precisa capacidad de cálculo –suma y resta-, totalizando hoja por hoja en el libro de cuentas los ingresos y egresos, el debe y el haber. Ajusto y tranquilo estaba el contador generalmente sentado ocho horas en una especie de santuario inaccesible al común, dedicado a sus cálculos llevados manualmente, hasta que apareció en apoyo de su algoritmia una sencilla “sumadora”, donde se introducían los guarismos y luego, mediante el accionar de una palanca, la máquina imprimía las cifras introducidas y la suma total. Nadie dudaba del resultado, en todo caso había que verificar la corrección de las cifras introducidas, pero la totalización era tenida por cierta; había confianza en la máquina. Finalmente, los softwares especiales y las computadoras hicieron obsoleto al contador público en la versión señalada, hoy el mismo está igualmente asistido por la tecnología.

De la misma manera, el escrutador, señor de cuya algoritmia se desconfió siempre, tiende a desaparecer en su versión primitiva, luego de una azarosa existencia. Existirán los miembros de mesas receptoras de votos (MRV), pero fuertemente asistidos por la urna electrónica. Esta maquineta no es sino un microcomputador para uso electoral; en realidad, un totalizador. Es resistente, pequeña, liviana y no decorativa; es autosuficiente en cuanto a energía, se autorregula para funcionar con corriente eléctrica de entre 90 y 240 voltios; solo sirve para elecciones.

La urna electrónica se compone de dos partes: una que es la terminal del elector: tiene una pantalla en blanco y negro –donde, según el sistema electoral de que se trate, aparece la grilla de oferta electoral de los partidos políticos en casillas con números (en Paraguay no más de dos dígitos)- y un teclado con números de 1 a 0, además de tres teclas adicionales con la leyenda “blanco”, “sí” y “no”, para que el elector formule sus opciones- y la otra parte es la microterminal de la MRV que también posee un teclado numérico- para digitar el número de cédula de identidad del elector que se presenta a la mesa- y una pantalla –donde aparece el

nombre del elector cuya cédula ha sido digitada y el número de orden en que figura en el padrón-; además, posee tres pequeñas señales visuales que informan a la mesa: a) verde encendida: la terminal está disponible para el elector, puede emitir su voto, b) amarilla: que el elector está votando y c) roja, la máquina está trabajando con batería.

Esta urna es ya la modernidad, porque, como cuenta don Ildefonso de Bermejo en la temprana historia política paraguaya, las elecciones eran más simples. Los “bandos” convocaban a elección popular “por voz y son de campanas”, se los leía en las iglesias del país, luego de la celebración de la misa mayor y “seguidamente se procedía a elegir a los representantes” del pueblo, elección recaída a propuesta no discutida en la persona del cura párroco, el propietario más respetado o el jefe político quienes iban a la Capital al Congreso convocado y escuchaban a su vez las propuestas de nombramiento de autoridades a las que adherían a viva voz y la “elección” estaba hecha. A penas terminada la guerra, el 24 de noviembre de 1870 –leemos en el Registro Oficial, Pág. 123, Tomo I-, una carta dirigida al Presidente del Gobierno Provisorio de la República desde la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Electoral le informa que “...la Honorable Corporación que preside, en su sesión nº 1 de la noche de hoy ha elegido a V.E. por mayoría de votos Primer Presidente Constitucional de la República del Paraguay, proclamándolo como tal y al Señor don Cayo Miltos vice Presidente...”. Así fue elegido don Cirilo Antonio Rivarola.

El Estatuto Electoral Provisorio, contenido en un decreto del 1º de abril de 1870, firmado por Cirilo Antonio Rivarola y Carlos Loizaga, disponía: “Artículo 20. Los votos serán dados verbalmente y a alta voz, no admitiéndose votos escritos. Serán dados por los mismos inscriptos, previa presentación de su boleta, que será confrontada con el registro. Artículo 21. Los escrutadores llevarán por separado dos registros en que escribirán sin interlineaciones blancas, raspaduras ni testadura, el nombre del votante y el número de inscripción haciendo la respectiva anotación de haber votado en el registro cívico y el nombre de la persona por quien diere su voto”. Y unos meses más tarde, la Convención, constituida en Asamblea Legislativa, con arreglo al artículo 128 de la Constitución del 70, dictó la Ley de Elecciones de la República del Paraguay. El artículo 33 disponía. “Los votos serán verbales o escritos y todos por los mismos sufragantes”. El artículo 34. “Los votos verbales serán emitidos en alta voz por los sufragantes, los escritos serán leídos del mismo modo por el Presidente de la mesa- serán rechazados todos los que no sean personalmente presentados”. Obviamente razones antropológicas, históricas, culturales, políticas, económicas y sociales avalan el sistema electoral en cada época y en cada sociedad, y los instrumentos se adecuan a esas realidades. En 1911 se introdujo por primera vez el voto secreto y la formación de un registro electoral permanente, buscando animar a la ciudadanía a compulsas electorales como modo de dirimir las competencias por el poder y así superar esta situación de anarquía política reinante entonces. Pero ni el registro cívico ni el secreto del voto pudieron ser implementados, dado el estado de violencia.

Un nuevo intento de institucionalización del voto se produjo en 1919, una reforma electoral puso en vigencia el sistema de elección indirecta para las elecciones presidenciales y un sistema de mayorías y minorías para la composición del Senado, correspondiendo un 25% de las bancas a la primera minoría y el resto para la mayoría. Mediante un pacto político, el modelo funcionó formalmente, pero la crisis política no pudo ser superada aún.

Intolerancias e incapacidad de soluciones políticas a los conflictos llevaron al país a una guerra civil en 1947, que duró seis meses. Dos por ciento de la población total quedaron en el campo de batalla y finalmente se instaló en el poder un sistema autoritario e intolerante desde 1954.

No está en nuestra intención hacer un recuento de la historia política paraguaya, solo recordar que desde 1954 hasta 1989 rigió en el República un gobierno militar autocrático en que los periódicos rituales electorales nada tenían que ver con la voluntad política popular, eran vanos intentos legitimadores de un poder de facto. Y recordar al solo efecto de tomar el 89 como punto de partida para revisar el comportamiento electoral en la República en el tiempo inmediato anterior a la propuesta de utilización del voto electrónico.

Cuando, a comienzos de febrero de 1989, se inició el cambio político con un golpe militar que derrocó a la dictadura militar, la conciencia cívica era que la primera tarea a realizar fuera la restitución del sistema democrático, mediante la puesta en vigencia de nuevas reglas de democracia electoral.

En el mismo año 89 se dictó la Ley N° 10/89, bajo cuya vigencia se realizaron las elecciones generales de mayo de ese año, que permitió a la oposición participar con reglas claras y sobre todo permitió la integración del Congreso mediante un sistema de representación proporcional.

En marzo de 1990 se promulgó el primer Código Electoral que contenía los principios y normas para la constitución, organización y funcionamiento de los partidos políticos, para el proceso electoral y para la organización del registro electoral. La convocatoria a elecciones seguía siendo potestad del Poder Ejecutivo y el juzgamiento, del Legislativo. Toda la administración del sistema electoral también seguía a cargo de la vieja estructura de la Junta Electoral Central, que ya no era patrimonio del partido de gobierno sino había abierto sus puertas a partidos de oposición que tenían, en el organismo electoral, funcionarios en la proporción de la representación parlamentaria.

Bajo la vigencia de esta Ley N° 1, se llamó a Convención Nacional Constituyente, y la nueva Constitución promulgada en junio de 1992 crea y estructura la Justicia Electoral, encargando a la misma la “convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y cuestiones derivados de las elecciones generales, departamentales y municipales –, pero también de todas las cuestiones relacionadas a consultas populares- así como de los derechos y los títulos de quienes resulten elegidos”. También caen bajo el ámbito de su competencia las cuestiones relativas a las elecciones y funcionamiento de los institutos políticos en general.

La Justicia Electoral tiene una doble naturaleza: es jurisdiccional y administrativa. En tal carácter forma parte integrante del Poder Judicial; el Tribunal Superior de Justicia Electoral está compuesto por tres Magistrados nombrados por el Senado con acuerdo del Poder Ejecutivo, a propuesta en terna del Consejo de la Magistratura. Esa doble dimensión le confiere facultades y responsabilidades peculiares que le posibilitan la permanente actualización de sus instrumentos para el mejor desempeño y eficacia en beneficio de la consolidación de la democracia.

La nueva Justicia Electoral entró en funciones recién en 1995, una vez en vigencia la Ley 635 del 28 de agosto de ese año. Su primera tarea fue la recuperación de la conciencia electoral, de la confianza ciudadana. Se precisaba un sinceramiento del registro electoral y de los padrones. Los utilizados hasta entonces estaban amañados, abultados, incompletos, desactualizados.

En noviembre de 1995, el Congreso dispuso la renovación total del Registro Cívico Permanente. En 120 días la nueva Justicia Electoral posibilitó la utilización del Registro renovado, totalmente informatizado, para la confección de los nuevos padrones a utilizar en las elecciones municipales de 1996.

El registro cívico se conformó según estas pautas: a) donde se inscribe se vota, para facilitar la participación, b) inscripción supervisada por los partidos políticos, para posibilitar el control recíproco, c) las oficinas de Registro Electoral se ubican en todos los distritos electorales, sus funcionarios provienen necesariamente de los tres partidos con representación parlamentaria, con ello se ejercita la cooperación y el diálogo interpartidario.

La pureza lograda de esta forma en el Registro Cívico se cifra en un 98%, lo que nos ubica entre las más eficientes de la región. Nuestro padrón es limpio, transparente y confiable, informatizado, de permanente actualización.

Bajo esta nueva realidad se celebraron las elecciones municipales de 1996, las generales de 1998 y la complementaria de la vicepresidencia de 2000.

Para seguir mereciendo la confianza ciudadana, la Justicia Electoral se esfuerza permanentemente por acceder a nuevas tecnologías y mejorar la calidad de los servicios en cumplimiento de los mandatos constitucionales y del compromiso con la ciudadanía.

De manera regular trabaja con organismos internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, buscando apoyo en la tarea. En 1998 observamos por primera vez las elecciones automatizadas en Brasil; sus ventajas ostensibles nos movieron a intentar su utilización en Paraguay.

Buscamos la alianza de la Organización de Estados Americanos, el apoyo de su asesoría electoral que ya que desde hace seis años coopera con nuestra institución fue decisivo. Nuestra propuesta fue aceptada por la OEA y por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil; el entusiasmo del Presidente de este organismo electoral, Dr. Nelson Azevedo Jobim, y del Señor Santiago Murria, de la Unidad para la Promoción de la Democracia de la OEA, fue con seguridad determinante. Obtenida la cooperación de ambas instituciones, se pudo dar inicio a un proyecto piloto para la utilización del voto automatizado en Paraguay.

La OEA nos otorgó el aval, gestionó y obtuvo la financiación del proyecto con fondos provenientes del gobierno norteamericano, el TSE de Brasilia nos dio el soporte político y técnico y el TRE de Paraná, la asistencia técnica informática y el programa de capacitación para poner a punto, con nuestros funcionarios especializados, la utilización de las urnas brasileñas en Paraguay. Desarrollamos un sistema de capacitación adecuado a nuestro medio

para funcionarios de mesas y usuarios del proyecto, es decir, electores ciudadanos y campesinos. En un par de semanas de intenso trabajo conjunto, se lograron los ajustes.

Para seleccionar los locales donde debían utilizarse las urnas en este primer plan piloto, se consideraron los siguientes criterios: a) Un municipio plenamente campesino, con escasa movilidad migratoria, para medir el comportamiento del paraguayo “incontaminado” frente a la urna electrónica, resultó Maciel, en Caazapá, a 220 km. de Asunción, donde instalamos 7 urnas para 1.901 electores; b) Un municipio con características de ciudad-dormitorio donde conviven ciudadanos, campesinos y migrantes, un universo cultural múltiple, resultó San Antonio, a 40 km. de Asunción, donde instalamos 39 urnas, para 11.056 electores; c) Un municipio que comparte parcialmente las dos características señaladas anteriormente en su sector urbano y rural respectivamente, pero que además tiene un alto grado de autoestima y conciencia de capacidad de gestión, resultó Atyrá, a 50 Km. de Asunción, donde instalamos 25 urnas para 7.093 electores; en estos tres municipios se votó en un 100% con urnas electrónicas. Solo se instalaron parcialmente urnas electrónicas en d) Un municipio fronterizo que ya conocía las urnas electrónicas utilizadas en Brasil, a 500 Km. de la Capital, resultó Pedro Juan Caballero, con 8 urnas, para 2.332 electores, un 6,52% de su electorado; e) En Lambaré, un distrito vecino de Asunción, instalamos 8 urnas para 2.413 electores, 4,18% de su electorado, y f) En Fernando de la Mora, también vecino de la Capital, instalamos 4 urnas, para el 1,99% de electores, 1.208 votos.

El TSJE dio participación a los Partidos políticos que compitieron en las elecciones municipales en todo el proceso de preparación y ejecución del proyecto piloto, la carga de las urnas, los controles informáticos y cuanto sea necesario para la transparencia y la confianza. Los partidos se convirtieron en cogestores del proyecto en la convicción de que la utilización de las urnas electrónicas fortalecía no solamente a la democracia nacional sino también a la democracia interna de los partidos. Una ley especial dio el respaldo legislativo al proyecto.

Terminado el “Plan Piloto Urna Electrónica” en noviembre de 2001, vimos que el porcentaje de participación con el uso del voto electrónico se mantuvo en un promedio del 80% aproximadamente, mientras que con el sistema manual se ubicó en un nivel muy inferior, en torno al 54%. Esto se debió posiblemente a la novedad, pero también a la confianza y a la rapidez del nuevo método.

Hechas las evaluaciones del Plan Piloto, constatamos que el uso del voto electrónico garantizó y garantiza:

1. respeto indiscutido al secreto del voto, los votos emitidos se almacenan en un disco especial, inviolable.
2. rapidez y facilidad para la votación: cada elector no precisa más que segundos para votar, un promedio de 25 segundos.
3. seguridad al proceso de votación, las urnas programadas para determinada secuencia no pueden ser alteradas.
4. fluidez del trabajo de los miembros de mesa, los cuales una vez capacitados ya no comenten errores, labor garantizada.

5. transparencia electoral, todo el proceso de programación se hace de manera fiscalizada por los actores políticos, pudiendo auditarse en todo momento el trabajo.
6. elimina el voto nulo que se da por error, no así el blanco que sigue siendo una opción política prevista en la ley.
7. agiliza el escrutinio, evita las angustias de esperas prolongadas.

Siendo signatario del Protocolo de Ushuaia –Mercosur- y de la Carta Democrática – OEA–, el Paraguay se esmera por actualizar y modernizar su sistema electoral para garantizar los extremos de transparencia y legitimidad democráticos de cada gobierno de la República y de los gobiernos locales. Por ello y luego de la evaluación del “Plan Piloto”, el Poder Legislativo autorizó a la Justicia Electoral la utilización del voto electrónico para elecciones internas de los partidos políticos, las municipales y las generales, según la Ley N° 1890 de septiembre de 2002, disponiendo textualmente “... queda igualmente autorizado la utilización de las urnas electrónicas en las elecciones internas, municipales y generales”. Claramente los legisladores querían utilizar urnas electrónicas inclusive para las internas de los partidos políticos, lo que lastimosamente en esta ocasión no fue posible por limitaciones administrativas y logísticas, pero que con apoyo de los partidos políticos han de ser superadas para las próximas internas.

A partir de esa autorización, la Justicia Electoral paraguaya renovó sus convenios con el TSE de Brasil y con la OEA, logrando en préstamo una partida de 6000 urnas electrónicas de parte la autoridad electoral brasileña, bajo la garantía de la OEA, para utilizar en un 53% del electorado, en ocasión de las elecciones generales previstas para el 27 de abril.

El elector campesino se comportó sin inconvenientes frente a las urnas electrónicas en ocasión del “Plan Piloto”; sin embargo, en esta oportunidad utilizaremos el voto automatizado preferentemente en áreas urbanas por razones de mejor organización, capacitación y asistencia técnica; es decir, razones que no califican la capacidad o incapacidad del elector.

Según ha resuelto el TSJE, para el 27 de abril próximo se habilitarán, en 433 locales ubicados en 33 distritos electorales, 4.435 mesas con urnas electrónicas. Pero previamente se desarrolla un programa de capacitación masiva de tal suerte a asegurar el buen manejo de los actores: elector, miembros de mesas y de Juntas Cívicas. Desde la primera semana de febrero se desplegaron en todo el territorio afectado al programa unas 600 “urnas escuelas” preparadas especialmente para capacitar al universo mencionado.

Hay 2250 personas que han de componer las Juntas Cívicas y unas 26.000 personas para integrar mesas receptoras de votos y las personas que deberán votar en urnas electrónicas alcanzan un potencial de 1.300.000.

El entusiasmo por el voto electrónico es comprensible, pues se halla sustentado sobre la verdad electoral indiscutida, la celeridad en el conocimiento de los resultados, el escrutinio automatizado y su impresión en copias suficientes para documentar debidamente a todos los apoderados. Además, la programación de los 452 centros de computación desde donde se transmitirán criptografiados los contenidos de los disquetes rescatados de las 4.435 urnas, garantiza la pronta recepción de los datos electorales en la Sede Central, lo que sin embargo será administrado por el TSJE con la debida prudencia, de tal suerte a consolidar resultados electorales antes de su propagación, para evitar manipulación de resultados parciales.

Para terminar, quiero señalar las fortalezas que nos transmite la votación electrónica en estos ocho puntos siguientes:

1. El uso del voto electrónico en el Paraguay es el primer paso del proceso de modernización de la infraestructura y profesionalización del personal de la Justicia Electoral. Fortalece a la institución electoral.
2. La adopción definitiva del voto electrónico apunta a impedir maniobras y manipulaciones fraudulentas que pueden darse en las mesas electorales. Transmite seguridad.
3. La votación electrónica tiene por finalidad ofrecer a la ciudadanía un escrutinio más ágil y rápido y con ello posibilitar tranquilidad a los actores políticos y electorales. Rapidez es igual a tranquilidad.
4. Con la votación electrónica el fraude se constituye en una operación más compleja y profesional, una mayor carga y mayor riesgo para quienes quieran intentarlo. Dificulta las pretensiones de fraude.
5. El proceso electoral en las votaciones electrónicas es más fácilmente auditable y, por tanto, ofrece mayor transparencia. La oferta electoral se procesa con transparencia.
6. Con la urna electrónica se incrementa la cantidad de votos válidos y se posibilita la merma de abstención electoral, lo que tiene como consecuencia el aumento de la eficacia de la soberanía popular; es, por tanto, una legitimidad mayor la que se obtiene.
7. No existiendo una casilla preparada para el voto nulo, este no existe, permitiendo la máxima eficacia en la emisión del voto.
8. Como el voto electrónico no es más que un toque de tecla, la rapidez es considerable, lo que resulta en mayor fluidez del paso del elector, de la utilización de su tiempo y, por tanto, su ánimo para participar.

Por todo esto decimos: Ahora votar es muy fácil.

NOVAPOLIS
Revista de Estudios Políticos Contemporáneos
<http://novapolis.pyglobal.com>